

Educación superior en comunicación para contribuir al cambio:
Del ejercicio academicista en el aula al vínculo con la realidad y los actores sociales
(Documento propuesto como parte del compromiso de seguimiento en el marco de la
"RedeCambio", así como insumo para la discusión y el enriquecimiento colectivo en
el seno de la Comisión Académica del Posgrado den Comunicación y Desarrollo de la
Universidad de Costa Rica)

Marvin Amador Guzmán (*)
Comisión Académica, Comisión del Posgrado
Maestría en Comunicación y Desarrollo, Posgrado en Comunicación
Universidad de Costa Rica

Resumen:

El artículo presenta un bosquejo de la perspectiva epistemológica de Comunicación y Desarrollo de la Maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Empieza con la presentación de un resumen del contexto neoliberal en que inició funciones la Maestría, así como de las características particulares y de algunos de los principales efectos que ha tenido la aplicación del modelo en este país. Posteriormente, presenta un esbozo de la perspectiva crítica que, sobre "desarrollo", "Comunicación" y "Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social" propone el posgrado. Desde estos enfoques críticos, sugiere una mayor vinculación del ejercicio académico con las prácticas sociales orientadas a la acción transformadora, desde la lógica de la comunicación participativa para el cambio social, y plantea la necesidad de procurar contribuir a la apertura de iniciativas académicas que apunten a fortalecer los procesos de investigación-acción.

Abstract:

The paper presents an outline of the Development Communication epistemological perspective of the Master of Communication and Development at the Universidad de Costa Rica. It begins by presenting a summary of the neoliberal context in which started operating the Master, as well as the particular characteristics and some of the main effects that has been the implementation of the model in this country. Subsequently, presents an outline of the critical perspective that, on "Development", "Communication" and "Communication for Development and Social Change" offers the Master. From these critical approaches, suggesting greater academic exercise linking with social practices aimed at transforming action, the logic of participatory communication for social change, and a need to seek help open academic initiatives aimed at strengthen the processes of "action-research".

* Comunicador, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y de la Maestría en Comunicación y Desarrollo del Posgrado en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA) de Costa Rica, promotor-colaborador en comunicación con organizaciones sociales por más de 18 años.

Introducción

Este trabajo se presenta, en primer término, con el fin de ofrecer una síntesis de las ideas que reflejan la propuesta de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social de la Maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el interés de que sean socializadas y compartidas en el marco del “Encuentro Internacional de Posgrados en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social”, que se realizó en Bogotá, Colombia, a finales del mes de agosto del 2014. El documento se ha ajustado para enriquecer los aportes generados en el marco de la recién conformada “RedeCambio”, que sugiere, precisamente, como acuerdo de seguimiento a partir del mencionado encuentro. En segundo término, el trabajo se elabora, a modo de documento base, como propuesta de sistematización de ideas para el intercambio y la discusión en el seno de la Comisión Académica de dicha Maestría, con el fin de que sirva de insumo para la reflexión colectiva en el proceso de revisión y reflexión que se está poniendo en práctica al cabo de 5 años de su apertura.

El contenido conceptual del documento se ha elaborado fundamentalmente en consideración de la perspectiva que, tanto en términos del “desarrollo” como de la comunicación, se propone en el marco del curso “Comunicación y Desarrollo”, que se imparte como parte del programa de la Maestría, y que sustenta, en buena medida, con los comprensibles y lógicos matices o giros individuales del equipo docente, la propuesta conceptual y epistemológica del posgrado. El enfoque del curso, y por tanto del documento, es abiertamente crítico respecto a la comprensión del “desarrollo” y de las perspectivas desde las que se asume y aborda la comunicación, en general, y la comunicación para el desarrollo y el cambio social, en particular.

Es muy importante señalar que, si bien se presentan como síntesis de la propuesta de la Maestría, las ideas acá recogidas reflejan esencialmente las ideas del autor. Si bien habría sido especialmente pertinente presentar una síntesis socializada y discutida de manera colectiva en el seno del cuerpo docente de la Maestría, el tiempo dispuesto para su elaboración no permitió concretar un espacio de intercambio de ese tipo. Sin embargo, dado que, después de 5 años de haber abierto su oferta académica, la Maestría se encuentra iniciando un proceso de revisión y reflexión, los contenidos del documento “caen” a bien como insumo generador para ese proceso.

A propósito de la estructura propuesta por los organizadores del evento, el documento se organiza en 3 capítulos o segmentos. En el primero de ellos se sintetiza el contexto político y social dentro del que se inscribe el surgimiento de la Maestría. En el segundo se propone una justificación del surgimiento y de la propuesta de la Maestría, dentro de ese contexto, y finalmente, en el tercero se desarrolla la síntesis conceptual y epistemológica que motiva el documento.

I. Breve contexto político y social del surgimiento de la Maestría: 25 años de neoliberalismo y reacción popular organizada

Contexto general: particularidades del neoliberalismo en el país y sus impactos

“Hace tiempo sabemos que Costa Rica tiene una evolución contradictoria. Que es (...) una sociedad a la que cada vez le resulta más difícil generar oportunidades de empleo decente para vastos segmentos de su población, y en la que se observa una ampliación de las brechas sociales, el debilitamiento de la gestión ambiental y el deterioro de la gestión política. Que mientras se ponía el énfasis en las políticas públicas que favorecieron el surgimiento de un dinámico y competitivo sector externo, se descuidó el fomento de las oportunidades laborales y empresariales de calidad en las demás actividades productivas” (Informe nacional sobre desarrollo humano, 2013).

Al igual que el resto de sociedades latinoamericanas, y con sus respectivas particularidades, Costa Rica se adentró en las dos primeras décadas del milenio en pleno “ejercicio” neoliberal. Para fines de la primera década del 2000, y hasta inicios del 2014, inclusive ⁽¹⁾, el país se evidenciaba, y se evidencia, en el “arrastre”, con bemoles también correspondientes a sus especificidades, de diversos impactos políticos, económicos y sociales derivados de más de 30 años de aplicación abierta del modelo. Es en ese contexto, concretamente en el 2010, cuando se da la apertura de la primera promoción de la Maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (en adelante MCyD-UCR), después de pasar por un período de formalización que se prolongó por aproximadamente dos años desde su propuesta inicial.

No fue casualidad que el inicio de la MCyD-UCR se diera en ese contexto, caracterizado por un importante nivel de tensión social y por una inesperada (aunque siempre limitada) apertura mediática al debate de la “cosa pública” y la cuestión del “desarrollo” nacional, todo esto “atizado” esencialmente por el relativamente reciente concluido proceso de sometimiento a referéndum (y posterior ratificación) del “Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana” (TLC).

La implementación del modelo neoliberal se da en Costa Rica a partir de 1982, con la llegada al gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), del Partido Liberación Nacional (PLN). Las políticas de corte neoliberal tuvieron continuidad desde entonces, con el posterior gobierno de Óscar Arias Sánchez ⁽²⁾, también del PLN (en la que sería su primera de dos administraciones), y con los sucesivos gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana, o “PUSC” (1990-1994, 1998-2002, 2002-2006) y del propio PLN (1994-1998, 2006-2010, 2010-2014). Es precisamente a finales de la administración Monge Álvarez, en 1985, en que se pone en marcha el primer “Programa de Ajuste Estructural”, o “PAE 1”, el cual —junto con los subsecuentes

“PAE 2” (1989) y “PAE 3” (1994)— se constituyeron en los referentes emblemáticos del modelo neoliberal en el país.

La “avenida” del neoliberalismo en el país implicó la ruptura abrupta con el llamado “Estado Benefactor” y el modelo de “Sustitución de Importaciones”, que se habían posicionado como ejes del “desarrollo” a partir de la década de los 40. Para finales de los años 70, se completaban más de 30 años de reforma social y económica, asentada en un cambio en la concepción de la función social del Estado, lo que implicó un fuerte impulso desde la institucionalidad pública para la prestación de servicios (en seguridad social, educación, provisión de agua y electricidad), en la construcción y mantenimiento de infraestructura pública (camino y carreteras, escuelas y colegios, hospitales y clínicas), en la orientación de política pública para diversificar una producción orientada al consumo interno y a la atención de las necesidades nacionales (brindando apoyo técnico y facilidades crediticias a los productores, facilitando la comercialización), y procurando mejorar las capacidades de producción industrial nacional (mediante la provisión de energía y la protección arancelaria).

En el marco de este proceso, el país no solo logró una sustantiva reducción de la pobreza, sino que aseguró altos índices de cobertura en materia de seguridad social, educación, acceso a agua potable y a servicios de electricidad y telefonía, de manera que se constituyó en un referente internacional por el nivel de “desarrollo” social alcanzado. En general, durante este período “hubo progreso significativo en las áreas de salud y educación, impulsado por la expansión de la cobertura de los servicios públicos, así como niveles crecientes de calidad de vida como producto de las mejoras en la distribución del ingreso y en la disminución de la pobreza (Lizano, Ulate, Trejos y Villasuso, citados por PNUD, 2013, p. 68). Según Céspedes y Jiménez, citados por Román (2010, p. 156), entre 1961 y 1971 el porcentaje de familias pobres “disminuyó de un 51% a un 39% en 1971, y es cercano a una cuarta parte de las familias en 1977” (3). En salud, de 1970 a 1980 la mortalidad infantil disminuyó de 68,4 muertes por mil nacidos vivos en 1970 a 19,9 en 1980, y la esperanza de vida al nacer aumentó más de 10 años (PNUD, 2013, p. 68). Gracias a una evolución favorable de la economía, “la producción total, la producción per cápita y los salarios mínimos reales crecieron a tasas anuales del 7%, 3,3% y 2,1%, respectivamente” (Román 2010, p. 156), lo que se reflejó en condiciones de altos niveles de equidad social, con un Coeficiente de Gini que apenas varió desde un 0,31 en 1960 a un 0,352 para 1980 (Román 2010, p. 152).

A partir de 1982 se inició el “nuevo” proceso de cambio, fundamentado esta vez en una ideología y en un discurso liberal, con aspiraciones “liberalizantes”, desde las que se apostaba por reducir la presencia del Estado en la economía y la sociedad. A pesar de esto, con el tiempo, las acciones del Estado dejaron en evidencia que, antes que un cambio liberal, y de manera contradictoria con el discurso, lo que se hizo fue propiciar otras formas de intervención del Estado, claramente orientadas a promover y apoyar la incursión de ciertos actores privados en otros ámbitos de la economía (Vargas, 2003, p 19).

En lo que se presentó como una suerte de reforma de perfil “doméstico”, en contraste con lo que ocurriera en la mayoría de experiencias de América Latina, en

donde se adoptaron las denominadas medidas de “shock”, “Costa Rica implementó una reforma “gradualista”, que tendió a imponerse de manera relativamente progresiva y prolongada en el tiempo ⁽⁴⁾. El modo “tico” de la reforma neoliberal consistió, según Arias y Muñoz (2007, p. 9), en “una combinación de políticas fiscales y monetarias recesivas, conjuntamente con otras más graduales y selectivas de reducción de tarifas arancelarias, control de precios y salarios y devaluación de la moneda nacional (...) de manera que las reformas neoliberales “fueron más graduales y balanceadas que las implementadas en la mayoría de los países de la región”.

Tres grandes líneas de política pública orientaron la implementación del nuevo modelo: reducción del tamaño del Estado y limitación de sus funciones interventoras; equilibrio monetario y fiscal, y disminución del mal llamado “gasto” público; y reorientación de la dinámica de producción, de modo que, antes que atender la demanda interna, se priorizara la exportación fuera de las fronteras centroamericanas. Al cabo de poco más de 30 años de aplicación del modelo, a pesar de haberse asegurado una relativa estabilidad en el crecimiento económico, los resultados y los efectos del neoliberalismo se reflejan en prácticamente todas las áreas, y ponen en evidencia la limitación de los alcances pretendidos. A continuación se presenta un resumen de los que, a juicio de quien suscribe, corresponden a los impactos más significativos de la vigencia del modelo:

- No se logró resolver el problema del déficit fiscal, que sigue evidenciándose y generando tensión política y social, sistemáticamente, cada año, cuando corresponde discutir y aprobar el presupuesto (osciló entre 1,5 y 3% del PIB entre 1988 y 2004, con picos negativos de 5,2% y 4% en 1994 y 2002, respectivamente, para pasar a dispararse luego a más de 5% en 2010 y 2013).
- Antes que una reducción del “tamaño” del Estado, se dio un recorte contundente en sus funciones orientadoras-interventoras tradicionales. El Estado perdió peso relativo como empleador ⁽⁵⁾, y se recortaron de manera abrupta recursos en salud y educación, lo cual, con el pasar los años, se ha reflejado en una reducción en la inversión per-cápita en estos sectores (Arias y otros, 2011, p. 82).
- Ha habido un significativo deterioro en la calidad de la prestación de servicios públicos de educación y salud (a pesar de mejoras en la cobertura). En el caso de la educación primaria y secundaria, la mala calidad y la atención masificada, así como la incapacidad para trascender a propuestas metodológicas más adecuadas a contextos y necesidades particulares, ha generado una fuerte emergencia de oferta privada y una brecha respecto a la calidad, que contribuye día a día al aumento de la brecha social. En el caso de la salud, son recurrentes los cuestionamientos y preocupaciones sociales por la mala calidad en la atención de la consulta externa en centros públicos de salud, así como por las dilaciones en la atención de intervenciones especializadas que, reflejadas en las denominadas “listas de espera”, implican postergar la atención a veces por años. Como contrapartida, también crece permanentemente la oferta de centros médicos privados. Todo esto ha provocado un aumento significativo del gasto privado per-cápita en salud en el país (Briceño, 2008, p. 26).

- Se ha generado un moderado e inestable ritmo de crecimiento económico, para nada similar al del período anterior, que ha fluctuado entre un 3 y un 4%, pero con ocasionales picos que lo han catapultado hasta un 8%. Esto ha tenido como contrapartida una sistemática tendencia al aumento del déficit entre lo que se importa y lo que se exporta ⁽⁶⁾. Por otra parte, este crecimiento se ha dado, en buena medida, a costa de un elevado impacto ambiental, lo cual ha implicado una fuerte conflictividad con sectores sociales que claman por una apuesta productiva verdaderamente sustentable. Además, este crecimiento ha tendido a concentrarse en algunos sectores particulares, vinculados a la actividad financiera y exportadora, lo cual ha conducido a que el país haya pasado de ser uno de los de mayor equidad en el continente, a ser el único que ha experimentado aumento en la desigualdad en los últimos 10 años.
- La re-orientación de la dinámica productiva hacia el mercado internacional se dio en función de un fuerte apoyo a las actividades de alta tecnología y, en el caso del sector agropecuario, a actividades de carácter intensivo y de gran escala, que se han articulado poco con las economías locales. En el primer caso, la dependencia de mano de obra muy calificada ha limitado la creación de empleo (acentuando la desigualdad social).
- En el caso del agrop, el desarrollo de actividades de gran escala se dio a costa de un fuerte impacto socio-económico en los sectores productivos tradicionales, particularmente el campesinado y los pequeños y medianos productores agrícolas. Como resultado, se generaron importantes impactos de carácter socio-económico que condujeron a una transformación radical del panorama rural, de modo que se pasó de una dinámica de producción con una importante participación de la pequeña y la mediana producción de granos y otros productos destinados al consumo local-nacional (como el maíz, el frijol, el arroz y el café), a otra de carácter intensivo-extensivo centrada en el interés agro-exportador (en productos como banano, piña, yuca, melón). Esta transformación implicó el agravamiento de una situación de crisis en el agro asociada al acceso a la tierra de sectores campesinos que han terminado quedando marginados de las dinámicas de producción ⁽⁷⁾. La explosión de estas actividades en zonas limítrofes y la imposibilidad del país de suplir toda la mano de obra del sector coadyuvó al aumento de movimientos migratorios, especialmente desde Nicaragua y Panamá, y acentuó la marginación de estas poblaciones migrantes, debido a su vulnerabilidad.
- A pesar de las condiciones de relativo crecimiento económico y generación de riqueza, el país ha sido incapaz de reducir la pobreza. Para 1994, después de superada la crisis de los 80, se llegó a un nivel de pobreza del 20%, el cual, pese a la evidente generación de riqueza que ha propiciado la propuesta productiva, se ha mantenido prácticamente inamovible desde entonces (Arias y otros, 2011, p. 88).
- A lo largo del período, y especialmente en los últimos 10-15 años, se han mantenido altos índices de desempleo, y ha aumentado significativamente la informalidad laboral. Para finales del 2013, solo un 38,8% de los trabajadores

asalariados del país disfrutaba de todos los derechos laborales establecidos por ley, mientras que un 6,5% no tenía acceso a ninguno de esos derechos, siendo además los sectores de menores ingresos y los que reciben salarios que están por debajo del mínimo de ley los más afectados por el incumplimiento de sus derechos (PNUD, 2013, p. 38). Aunque esto no se puede señalar como un efecto directo de la disminución del crecimiento del empleo público, sí está directamente asociado al aumento del empleo en el sector privado y a una tendencia —propia del modelo— de reproducir la flexibilización en las relaciones laborales.

- Desde el inicio de la década del 90 se generó una tendencia al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, y esa desigualdad ha continuado creciendo de manera significativa en los últimos 12 años. Aunque la evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra que, incluso después de 1980 el país ha “continuado” mejorando, esta mejoría se ha dado a un ritmo más lento que en otros países (PNUD, 2013, p. 69). Con toda seguridad, este “alertagamiento” en la mejora del “desarrollo” medido a través del IDH no se muestra más crítico debido al sesgo que se produce con este índice al invisibilizarse —por la vía de la medición del ingreso per-cápita—, la desigualdad en la distribución del ingreso.

Entre todos estos efectos, hay que destacar de manera especial —por el hecho de que refleja una suerte de agregación de muchos de los demás efectos señalados— el creciente aumento de la desigualdad social, determinada a partir de la desigualdad en los ingresos. De acuerdo con las cifras oficiales, para 1990 (una vez “superada” la parte crítica de la crisis de los años 80), el “coeficiente de Gini” del país era de 0,360, mientras que para el 2009, en el pico de la “nueva” crisis económica, el coeficiente había llegado a 0,439 (Arias y otros, 2011, p. 89). De acuerdo con el PNUD (2013, p. 45), para el 2012 subió hasta 0,518, constituyéndose el país como el único en Latinoamérica que aumentó la desigualdad de ingresos en la última década.

A modo de síntesis agregada de los efectos resultantes de este largo período de implementación neoliberal, se presenta el siguiente extracto del “Informe nacional sobre desarrollo humano 2013”, que expresa de manera alegórica las contradicciones propias del país, derivadas de la pervivencia del modelo neoliberal:

“Hace tiempo sabemos que Costa Rica tiene una evolución contradictoria. Que es un país modernizado a partir del impulso exportador, un crecimiento económico moderado y una reciente (aunque vulnerable) estabilidad monetaria. Que es, también, una sociedad a la que cada vez le resulta más difícil generar oportunidades de empleo decente para vastos segmentos de su población, y en la que se observa una ampliación de las brechas sociales, el debilitamiento de la gestión ambiental y el deterioro de la gestión política. Que mientras se ponía el énfasis en las políticas públicas que favorecieron el surgimiento de un dinámico y competitivo sector externo, se descuidó el fomento de las oportunidades laborales y empresariales de calidad en las demás actividades productivas. Que pese al aumento en el gasto educativo ha habido poco avance en la formación del recurso humano necesario

para competir con ventaja en la economía internacional. Que la mayor tutela de los derechos de las personas coincidió con un creciente descontento ciudadano con el rumbo del país y su sistema político (...).

Los eventos de mayor relieve acontecidos en ese lapso, en la mayoría de los casos, agudizaron los problemas ya analizados por este Informe, en especial la creciente insostenibilidad en el uso del territorio y los recursos naturales, la erosión de la situación fiscal, los modestos resultados en los mercados laborales, la desigualdad en la distribución de los ingresos y el debilitamiento de la gestión gubernamental. Hubo progresos en la contención de la violencia social y mejoras importantes en los indicadores educativos y de salud. No obstante, visto en su conjunto, fue un período gris, similar a los últimos, en el que las buenas noticias no lograron atender los desafíos del desarrollo humano, ni generar confianza ciudadana en el rumbo del país” (PNUD, 2013, p 33).

En un contexto de crisis económica social, ya desde el momento mismo de aplicación de las primeras decisiones de gobierno asociadas al modelo, se generaron brotes de reacción popular organizada. En primer término, estuvieron reacciones de las organizaciones sindicales del sector público ⁽⁸⁾. La aparición paulatina de conflictos sociales de todo tipo, derivados directa o indirectamente de la progresiva aplicación de las políticas neoliberales, condujo desde el inicio al surgimiento progresivo y recurrente de focos de movilizaciones y luchas sociales, generalmente desarticulados, a veces surgidos de manera espontánea o aislada, a la luz de circunstancias coyunturales y particulares, y a veces propuestas desde bases organizativas y con perfiles más o menos permanentes.

Los principales frentes de lucha y movilización popular generados como reacción a las políticas neoliberales han estado asociados a la reivindicación de derechos laborales y mejoras salariales, al acceso a tierra y a vivienda, a la defensa de presupuesto (en el caso de las universidades públicas), a la protección de los recursos naturales (tanto en función de dinámicas y procesos generales —como en el caso de la expansión de la producción de banano y piña—, como en virtud de conflictos suscitados a partir de megaproyectos o proyectos específicos de escala mediana o pequeña), a los impactos socio-laborales (como en el caso de la población migrante y de obreros del sector agrícola), a la oposición a proyectos vinculados a intereses privados o públicos de generación de energía (especialmente generadoras hidroeléctricas), y a lo procura de condiciones para asegurar o defender la producción agrícola local-nacional, entre otros.

En este panorama, destacan de manera especial dos momentos de movilización-acción popular, ambos relacionados con “intentos” de implementación de propuestas de política pública de origen claramente neoliberal. Por una parte, la reacción y movilización popular, en el año 2000, de oposición a la aprobación del denominado “Combo ICE”, una ley aprobada de manera irregular, derivada de un “mal-habido” proceso de concertación nacional, con la que se pretendía privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una institución pública emblemática del “desarrollo” nacional y encargada de la rectoría en generación eléctrica y

telecomunicaciones ⁽⁹⁾. Por otra parte, destaca la movilización y acción popular organizada, durante el 2007, para oponerse a la ratificación del “Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana” (TLC).

La emergencia recurrente de los diversos focos de conflictividad social en el país a lo largo de los 30 años de vigencia del modelo neoliberal, ha conducido al desarrollo de una dinámica progresiva de acciones organizativas y de movilización social ⁽¹⁰⁾. Esta conflictividad representó una consecuente reacción contestataria a las lógicas impositivas, sistemáticamente ausentes de diálogo e interlocución social, que caracterizaron a las clases políticas impulsoras del modelo, así como a los impactos más puntuales, sectoriales o nacionales, de las políticas y acciones impulsadas como consecuencia de la apuesta a la propuesta neoliberal.

Estas acciones asumieron diversas modalidades y formas de acción, y expresaron exigencias y reivindicaciones de todo tipo. En general, las acciones sociales expresaron y reflejaron diversas formas de comunicación, vinculadas siempre a objetivos, actividades y procesos orientados a la reivindicación de derechos a nivel local-regional o sectorial, a la sensibilización de la población respecto a los impactos del modelo (generalmente con poca perspectiva de totalidad) y a la educación-capacitación destinada a la construcción de propuestas locales de organización y producción alternativas.

II. Sentido y razón de ser de la Maestría en Comunicación y Desarrollo de la UCR en este contexto

“Cuando el espacio de la comunicación se volvió un lugar estratégico para pensar algunas de las contradicciones fundamentales del desarrollo en América Latina, las herramientas que los comunicadores tenían para pensar estos procesos se les quedaron cortas” (Martín-Barbero, 2012).

Con el cambio de modelo a inicios de los 80 y el advenimiento del neoliberalismo, la aparición de la oferta privada de servicios que hasta el momento, por “tradicción”, se habían ofrecido total o esencialmente desde el sector público, se fue haciendo patente de manera progresiva y creciente. Este fue el caso de la oferta de Educación Superior. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Rectores (2013), mientras que para inicios de la década de los 80 existían 4 universidades públicas y se contaba apenas una sola universidad privada en el país, para el 2013 existían 5 universidades públicas y la oferta privada había llegado a 53 universidades ⁽¹¹⁾. Una dinámica similar se ha venido presentando en la educación en los niveles de pre-escolar, primaria y secundaria, así como en el caso de los servicios de salud.

Se podría afirmar que, ya para inicios de la primera década del nuevo milenio, a la luz de experiencias organizativas acompañadas de diversas formas de acción comunicacional alternativa, la comunicación se había posicionado como una herramienta presente y necesaria, ya fuera de manera implícita o explícita, consciente o inconsciente, para la organización, la movilización y la acción social

organizada. En este sentido, además de diversas experiencias de medios —sobre todo impresos— de organizaciones sindicales, son de destacar experiencias de comunicación como las del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja (CEP-Alforja), así como las de la Asociación Voces Nuestras, la Asociación Ecologista Costarricense (1987- 1999), el Foro Emaús (1992-2008), y el Frente de Lucha contra la Minería de Oro a Cielo Abierto en Costa Rica (1996-2010), entre muchas otras. Esta realidad, sin embargo, contrastaba de manera contundente con la oferta académica en comunicación, que seguía presentándose como tradicional, y no llenaba de manera pertinente las necesidades educativas-formativas específicas.

A nivel de instituciones públicas de educación superior, la única universidad del país que ha ofrecido propuestas de educación-formación en el campo de la comunicación ha sido la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Si bien esta universidad ha educado profesionales en comunicación desde finales de los años 60 (originalmente como Escuela de Periodismo), en general sus propuestas educativo-formativas estuvieron orientadas a educar profesionales en los ámbitos más “liberales” de la comunicación (periodismo, en primer instancia, y más adelante publicidad, relaciones públicas y producción audiovisual). Con estas propuestas educativo-formativas, se trató de atender las demandas del mercado laboral formal en esos campos.

Es preciso señalar que, al igual que afirman otros autores para referirse a lo que acontece en América Latina en general (Barranquero, 2010), en el país, incluso desde la universidad pública (para el caso, desde la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica), muy a pesar de un fuerte peso en la perspectiva teórica crítica, los esfuerzos educativo-formativos en comunicación han tenido un marcado énfasis “profesionalizante”, y han estado históricamente orientados, como se mencionó, a atender las necesidades y exigencias del mercado formal, desde los requerimientos del periodismo, la publicidad y las relaciones públicas. La perspectiva de la comunicación para el desarrollo, o comunicación para el cambio social, ha estado ausente o desdibujada en las propuestas educativo-formativas formales de la universidad pública en Costa Rica, y los puestos de comunicación en organizaciones sociales o internacionales que demandan el ejercicio profesional específico en esos campos han venido siendo asumidos por graduados de algunas de las áreas de comunicación señaladas, que, desde su educación profesional, plantearon inquietudes críticas respecto a la práctica de la comunicación tradicional, e incluso por profesionales de otras áreas de las Ciencias Sociales (particularmente profesionales en sociología o antropología).

Aunque durante la década de los 80 la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica ofrecía una opción de estudios en Comunicación Social, dicha opción desapareció en 1988 —de manera consistente con el marco neoliberal predominante— a partir de la implementación de un nuevo plan de estudios. Después del plan de 1988, y habiéndose pasado por un cambio intermedio de plan en 1998, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva implementó una nueva propuesta educativa en el 2012, en la que, de nuevo, y después de 24 años, se ofrece como una de sus opciones el énfasis en Comunicación Social, dentro del cual se incluyó un curso de “Comunicación para el Desarrollo”. Por

otra parte, ha sido evidente, al menos para el contexto nacional, que las universidades privadas nunca se interesarían en abrir alguna oferta educativa que se “saliera” del perfil de formación profesional requerido por el mercado formal. Antes que eso, más bien han venido ofreciendo programas de estudio que se centran en abordajes esencialmente técnicos y que buscan el desarrollo de competencias instrumentales antes que de conocimientos teóricos y sociales, de manera que adolecen de contenidos humanistas y de cultura general.

De este modo, se puso de manifiesto una carencia de profesionales formados de manera pertinente en los requerimientos propios de la comunicación social en alguna rama al menos cercana al enfoque de comunicación para el desarrollo o en las exigencias y lógicas propios de los procesos sociales de cambio. Está claro que estos campos correspondían de manera más adecuada a la atención de las necesidades derivadas del acompañamiento a los procesos sociales y a las luchas populares no vinculados a las gestiones productivas empresariales convencionales o de instituciones públicas tradicionales, por lo que existía una carencia educativo-formativa que permitiera llenar ese vacío.

Cabe destacar que, si bien la década de los 80 había mostrado un importante posicionamiento de profesionales de comunicación en las denominadas (y novedosas) oficinas de prensa de las instituciones públicas del Estado, las cuales se crearon en lo fundamental para atender necesidades de información de los medios masivos, durante los años 90 ocurrió con alguna frecuencia que las instituciones públicas, incluso a pesar de la existencia institucionalizada de oficinas de prensa internas, contrataban los servicios de “agencias” de comunicación privadas, que en lo fundamental presentaban una oferta de servicios basada en la lógica de las Relaciones Públicas ⁽¹²⁾.

Si se considera que, como consecuencia de la aplicación de recortes presupuestarios derivados de la aplicación de las políticas económicas neoliberales, múltiples oficinas públicas cerraron programas y proyectos de atención y capacitación a pequeños y medianos productores agrícolas a nivel local, fue evidente el hecho de que el sector público no constituyó —como tampoco constituye hoy día— un frente de demanda profesional en alguna rama de la comunicación cercana al enfoque de comunicación para el desarrollo y el cambio social.

En este contexto, y ante un panorama que, en mucho, mostraba que el ejercicio de la comunicación aplicado a procesos sociales vinculados a las necesidades del “desarrollo” social, la reivindicación de derechos y la búsqueda del cambio estaba cayendo sobre los hombros de profesionales no necesariamente formados de manera específica en el campo pertinente, surge la propuesta de la MCyD-UCR. Como se mencionó antes, el inicio de la Maestría se da en un contexto social influenciado por el relativamente reciente proceso de referéndum para la ratificación del TLC, caracterizado por cierta tensión social y por una inesperada apertura al debate de la “cosa pública” y la cuestión del “desarrollo” nacional ⁽¹³⁾.

La ratificación del TLC en el país marcó un hito especialmente importante dentro del particular momento histórico por el que venía (y viene) atravesando el país, y, desde

la perspectiva de quien suscribe, más allá de las fundadas preocupaciones respecto a las implicaciones que tendría ante el evidente recrudescimiento de la lógica de mercado en la dinámica socio-económica del país (además de todas sus posibles consecuencias en términos de la dependencia y la soberanía política-económica), este hito comportó tres implicaciones sustantivas en lo que al devenir político-social del país se refiere.

En primer término, la ratificación del TLC conllevó a la percepción —por parte de los sectores que venían abanderando e impulsando el modelo— de que se había alcanzado una suerte de meta superior, y que, más allá de esa meta, “quedaba” poco o nada por hacer en términos del cambio iniciado en los 80. En segundo término, este proceso constituyó la concreción de un ejercicio de alcance nacional que permitió constatar, con contundencia y mejor que nunca desde la imposición del modelo 30 años atrás, la existencia de un balance de fuerzas muchísimo más equilibrado de lo imaginado por parte de los grupos que venían ejerciendo oposición o resistencia, y facilitó, para estos sectores, la auto-referenciación de una capacidad de acción colectiva que estaba muy por encima de lo que se podía haber previsto ⁽¹⁴⁾. Finalmente, el proceso de ratificación del TLC propició, aunque en muy buena medida de manera forzada, la apertura y consecuente legitimación de cierto espacio —siempre limitado, pero espacio al fin— para el debate “público” respecto a la cuestión del modelo de “desarrollo” y, sobre todo, respecto a sus posibles alternativas.

No hay duda de que el proceso de ratificación del TLC constituyó un acontecimiento especialmente y sin duda relevante en el panorama nacional, en tanto supuso un “momento culminante” en el proceso de “apuesta” que, desde inicios de los años 80, venían haciendo la clase política en el poder y los sectores de las élites económicas del país —claramente aliadas—, por privilegiar el mercado y el “libre” comercio” como vías para orientar el devenir del “desarrollo” nacional ⁽¹⁵⁾. Pero, por otro lado, más que haber definido el establecimiento absoluto de la propuesta neoliberal, este hito más bien parece haber marcado un punto de inflexión en lo que a la reacción del movimiento social y las fuerzas políticas adversas al modelo se refiere.

La Costa Rica del 2010, año en que se ofrece la primera promoción de la MCyD-UCR, difiere poco respecto a la situación del país a inicios del 2014. Hay que decir, eso sí, que las elecciones presidenciales realizadas en los primeros meses de este año condujeron al triunfo electoral y a la llegada al gobierno de un partido de corte socialdemócrata, con lo cual, después de 30 años consecutivos de presencia de gobiernos “proclives” al modelo dominante, se plantean expectativas en términos de, al menos, una posible reducción en el acento neoliberal de la gestión pública. Por lo pronto, es demasiado temprano para valorar qué se podrá esperar.

Como se mencionó anteriormente, la MCyD-UCR acoge a su primera promoción en el 2010. Su surgimiento se inscribe en el contexto de “desencanto” político y conflictividad social que se reflejaban después de 30 años de neoliberalismo, y dentro del cual, a pesar de la renuncia sistemática de la clase política de los diferentes gobiernos neoliberales al debate público sobre los temas de interés y trascendencia nacional, la organización social y la academia ganan legitimidad y más

espacios para proponer la discusión crítica sobre el modelo, en particular, y sobre el “desarrollo”, en general. El proceso de referéndum para la ratificación del TLC, realizado en el 2007, jugó un papel determinante en la creación de condiciones para la legitimación de este debate.

En este contexto, se presentó, y se presenta, la MCyD-UCR del Posgrado en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, como una propuesta educativo-formativa de perfil académico (en contraste con ofertas académicas de perfil profesional, que brindan una formación de carácter más técnico y aplicado), y que procura hacer un aporte, desde la academia, a las necesidades de educación en el campo de la comunicación orientada al cambio social. La Maestría hace énfasis en el estudio crítico de las Teorías de la Comunicación, las Teorías del Desarrollo, los enfoques de Comunicación y Desarrollo, y estrategias de Comunicación para el Cambio Social. Además, facilita un acercamiento crítico a los temas de Tecnologías de la Comunicación e Información, Organización y Movimientos Sociales, y profundiza en el tratamiento de procesos y herramientas de investigación social.

La MCyD-UCR representa una propuesta nueva, que se encuentra en proceso de consolidación académica, a pesar de lo cual ha logrado permear en las aspiraciones educativo-formativas de estudiantes de diversas disciplinas de base, pero que, en general, mantienen vinculación con grupos o sectores abocados al trabajo y la acción social para el cambio. Al cabo de poco menos de 5 años de existencia, y con 5 promociones consecutivas, la experiencia constata un interés constante, con tendencia creciente, por vincularse a la propuesta académica del posgrado.

III. Planteamiento teórico: del modernismo al cuestionamiento del “desarrollo” como meta, del difusionismo a la comunicación participativa para el cambio

Una reflexión necesaria: cómo y para qué educar en comunicación

Cualquier ejercicio comunicacional que tenga pretensiones de cambio social debe partir de una lógica sustancialmente diferente, pensada en función de la acción colectiva a la que estamos convocados, no como “targets” o “públicos meta”, sino como sujetos conscientes de nuestra propia realidad, prestos a asumir el rol de actores en el proceso de construcción y de cambio, es decir, de re-significación del hacer humano (Amador, 2013).

¿Tiene sentido pensar a la comunicación para el desarrollo y el cambio social —ya sea que se le asuma como un solo campo integrado o como dos campos de quehacer independientes— sin considerar que, sea cual sea la “trinchera” desde la que se le aborde, debe estar orientada necesariamente a procurar el cambio? La respuesta a esta pregunta no parece ser difícil de atender. Cuando se trata de pensar este campo de la comunicación, ya sea en función de sus orígenes concretos, o bien en términos de las esenciales intencionalidades y funcionalidades que la definen, y ya sea que se le mire desde lógica modernista-difusionista o que se acoja desde la perspectiva crítica que es propia de la tradición latinoamericana, hay que decir que carece de

sentido pensar a la comunicación para el desarrollo y el cambio social (en adelante CDyCS) desligada de la acción necesaria para procurar el cambio o la transformación social.

Si es una necesidad urgente que nuestras universidades abran el debate —generalmente ausente o apenas parcialmente abordado en los escenarios de las universidades públicas latinoamericanas— respecto al papel social que deben jugar los/las profesionales en comunicación que se educan en nuestras aulas, esta discusión y la necesaria acción correspondiente son todavía más urgentes y requeridas en el caso de los espacios de educación universitaria que tienen como objeto de su ejercicio académico la CDyCS. Y esto es así porque, si hay un elemento paradigmático intrínseco a este campo —vinculado tanto a su alcance teórico-conceptual como a su método y a su quehacer— lo es el hecho de que existe por y para la procura del cambio, y para el caso de la propuesta latinoamericana, este cambio entendido en términos de la generación de condiciones que propicien la construcción de sociedades más justas e incluyentes, económicamente más equitativas, ambientalmente más sanas y sustentables y políticamente más democráticas e inclusivas. Sin embargo, pese a esta evidente constatación, también se constata que la práctica generalizada de los procesos educativo-formativos desde los cuales se le asume, apunta a reflejar poca coherencia con esta esencia básica.

En tanto la constatación de esta vinculación necesaria de la CDyCS con la acción para el cambio es evidente, esta circunstancia plantea interrogantes significativas para la academia que centra sus esfuerzos educativos en este campo, no solo en términos de la que pueda ser su propuesta metodológica, sino, y ante todo, en términos de la forma en que se conciba la vinculación con el conocimiento propiamente dicho. En el mismo sentido, y como derivación obligada de las interrogantes anteriores, surge la necesaria pregunta de si la labor académica debería limitarse al ejercicio academicista típico —derivado de la histórica tradición positivista que le es propia, delimitado por el aula, basado en el conocimiento segmentado y especializado, y apoyado en la revisión y discusión de textos de autores “expertos”, muchas veces “leídos” en abstracto y vinculados a situaciones y contextos “lejanos”, o de si, por el contrario, debería romperse con ese paradigma de conocimiento académico para procurar una vinculación más sustantiva con el acontecer social y con las prácticas de comunicación propiamente dichas, en especial —aunque no únicamente— con aquellas que suponen algún esfuerzo aplicado de comunicación para el cambio social.

Sigue siendo evidente que, en muchos casos, tanto desde la academia como de parte de los actores vinculados al quehacer propiamente dicho, la perspectiva desde la cual se acoge a la CDyCS no dista en mucho de los enfoques modernistas-difusionistas, y, desde allí, ni los objetivos que se proponen (pues siguen directa o indirectamente ligados a las lógicas del desarrollismo) ni los métodos y estrategias (que siguen privilegiando los abordajes verticales, autoritarios y norte-centristas), ni las técnicas y herramientas (pues se sigue aspirando al acceso a los medios masivos y se siguen utilizando herramientas para emprender las mismas prácticas reproductoras del estatus quo) reflejan rupturas significativas con las prácticas más convencionales de la comunicación.

A pesar de que, en la práctica, la MCyD-UCR mantiene una propuesta epistemológica que está mucho más cercana a esa tradición de conocimiento positivista típica — donde el ejercicio en el aula es, en lo fundamental, “el” ejercicio—, es nuestro criterio que un abordaje realmente coherente y consistente con las exigencias epistemológicas y éticas de la educación en CDyCS debe procurar un acercamiento permanente con los escenarios de la realidad social, en general, y en particular una mayor vinculación con el quehacer y la práctica propios de ese campo. Esto supondría, en primer instancia, el desarrollo de esfuerzos de estudio y análisis de la realidad social que permitan, por una parte conocer y entender en qué medida y de qué manera los procesos sociales de comunicación transitan por el devenir social, y por otro lado, aportar en el reconocimiento, la reflexión y la socialización, así como en la propuesta y el apoyo, para el mejoramiento de las prácticas que los diversos grupos sociales —sean estos grupos u organizaciones sociales, iniciativas públicas o mixtas— desarrollan en procura de concretar cambios acordes con las necesidades sociales fundamentales, más allá de las necesidades concretas y excluyentes del mercado formal, y desde la ineludible óptica de los derechos humanos.

Desde esta perspectiva, a pesar de las importantes limitaciones que imponen las estructuras universitarias, establecidas más en los términos de esas lógicas positivistas que en cualquier aspiración a la integración de quehaceres y a la vinculación sustantiva con la realidad social, desde su nacimiento la MCyD-UCR ha venido procurando concretar acercamientos más allá de los típicos ejercicios de investigación “desde fuera” de la realidad. El último de ellos se concretó en el “Simposio de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social”, el cual, organizado en el 2013 en el marco del “Primer Congreso Centroamericano de Comunicación”, convocó a diversos actores sociales no académicos de la región centroamericana que dedican esfuerzos de cambio desde la comunicación (¹⁶).

En tanto propuesta académica joven, con menos de 5 años de presencia, la MCyD-UCR se encuentra en un proceso de revisión y de reconsideración de sus ejes de investigación, así como de reformulación de su propuesta de vinculación con los diversos actores sociales que realizan comunicación motivada por el cambio social, y esto está fundamentado en un interés de considerar, dentro de los límites formales, administrativos y de recursos permitidos por la estructura universitaria en la cual se inscribe, un paulatino acercamiento a estas conexiones con la realidad, necesarias desde la perspectiva de esta concepción epistemológica que, en principio, consideramos que le corresponde.

La comprensión de esta toma de posición epistemológica que propone la MCyD-UCR, crítica de la práctica academicista convencional, requiere de una revisión de las perspectivas desde las cuales abordan y comprenden los temas del “desarrollo”, de la comunicación y de la comunicación en sus vinculaciones con el “desarrollo”.

La adopción de una postura crítica respecto a la CDyCS, y la respectiva comprensión de la propuesta epistemológica de la Maestría se fundamentan, a su vez, en la adopción de una mirada crítica respecto al “desarrollo”, primero, y a la comunicación, después. Desde esas posturas críticas, se explicita la propuesta de

“acercamiento y análisis de la realidad, y de vinculación con actores sociales” que se propone el posgrado como derrotero de construcción de conocimiento, y que tiene como su principal referente a la comunicación participativa para el cambio.

Una perspectiva crítica del “desarrollo”

“La humanidad se encuentra en una encrucijada. Una promesa hecha hace más de cinco siglos, en nombre del “progreso”, y “reciclada” hace más de seis décadas, en nombre del “desarrollo”, no se ha cumplido” (De Souza Silva, 2011).

A pesar de la “recusa” al debate público impuesta por el neoliberalismo, hay que decir que las circunstancias de crisis y conflictividad social asociadas a la aplicación del modelo al cabo de 30 años han obligado a poner de nuevo sobre la mesa la discusión sobre el “desarrollo”. Pero, a diferencia del debate emergente a fines de los años 50, a propósito de los planteamientos críticos de la “Teoría de la Dependencia”, y desde la cual empezó a cuestionarse la lógica mecanicista, norte-centrista, a-histórica, atomista y apolítica desde la que se quería imponer la idea modernista del “desarrollo”, el debate convocado hoy día no apunta tanto a discutir sobre su forma de entenderlo y aplicarlo, sino que, más bien, está convocado para discutir sobre la pertinencia misma del “desarrollo” y sobre la necesidad de proponer y construir otras metas y vías para el devenir social humano.

A pesar de que, al decir de de Souza (2011, p. 4), “en el mundo moderno, casi todo es ordenado para el “desarrollo”, y el “desarrollo” pareciera seguir reflejándose y reproduciéndose como “la” meta universal, hay que decir con contundencia que 70 años de “desarrollo”, impulsado durante los últimos 30 años desde el neoliberalismo, no han sido capaces de atender debidamente los principales “males” sociales de nuestros países, y de la humanidad como un todo. Lejos de eso, y por el contrario, no solo parecen haber aumentado en volumen los males sino que han aparecido otros “nuevos” males sociales que ponen en cuestión tanto la condición de “humanidad” de la civilización construida, como la propia posibilidad de la supervivencia humana, al menos en el marco y dentro de las lógicas de esta sociedad moderna occidentalizada construida a partir del paradigma modernista.

Ni los ajustes, más bien acomodadizos —que parecieran surgidos más bien para atender los cuestionamientos de fondo planteados desde diversas esferas críticas—, derivados de las propuestas del “Desarrollo Sostenible”, primero, y del “Desarrollo Humano Sostenible”, después, lograron, luego de décadas, “salvar” la apuesta por el “desarrollo” como meta, y más bien parecen haberse posicionado como referentes inmovilizadores en el imaginario colectivo —tanto en organizaciones sociales, actores políticos y agencias de la cooperación, como en el común de la gente— sin que hayan conducido a cambios ni siquiera mínimamente sustantivos en las prácticas reales y en los impactos negativos generados como consecuencia de la reproducción sistemática de la propuesta modernista. Y, así, a pesar de que nunca antes ha habido tanta capacidad (económica, tecnológica y organizacional) para atender las carencias y los problemas humanos, nunca antes tampoco ha habido tanta hambre y tanta miseria en el mundo perviviendo de manera tan violenta e inmoral al lado de la opulencia más absoluta.

A la par de la prevalencia de esta evidente “dicotomía humana”, todas nuestras sociedades transitan día a día, en una suerte de perversa e inconsciente rutina cotidiana, por una vorágine de consumo de bienes y servicios, que tiene tras bambalinas la permanente y exponencialmente creciente destrucción (producción, de acuerdo con la lógica del “desarrollo”) de recursos naturales (con sus consecuentes impactos en los equilibrios bio-ecosistémicos), así como un sistemático agotamiento de recursos vitales, entre ellos el agua, y de las fuentes de energía esenciales para el sostenimiento del sistema. Y todo esto ocurre ante la mirada lamentablemente impávida y expectante del mundo. Y, por supuesto, hay que poner acento en el señalamiento de que todo esto se legitima y se reproduce a partir de una dinámica comunicacional que se encarga, entre otras múltiples funciones específicas, de asegurar la reproducción sistemática, tanto de los modos de pensar y actuar, como de las normas y de las realidades que son consustanciales a este modelo de “desarrollo”.

A pesar de los altísimos estándares de vida alcanzados —eso sí, disfrutados solo por un pequeñísimo sector de privilegiados del mundo—, lo cierto es que el paradigma del “desarrollo”, modelado y aplicado en los últimos 30 años bajo la propuesta neoliberal, pareciera estar conduciendo a la humanidad a un horizonte sin posibilidad de retorno, que pone en duda la subsistencia misma de la civilización.

En el interés de entablar una posterior relación con nuestra propuesta epistemológica, se hace necesario señalar también que, a pesar de que la idea de “desarrollo”, en su propuesta modernista, surge a finales de los años 40 del Siglo XX, en realidad comporta una suerte de “adecuación”, ante las “nuevas” circunstancias de la geopolítica y la economía mundial, del sistema colonialista que le antecedió, tal y como lo propone de Capra:

“La visión de mundo y el sistema de valores que están en la base de nuestra cultura, fueron formulados... en los siglos XVI y XVII. Entre 1500 y 1700, hubo un cambio drástico en la manera como las personas describían el mundo y en todo su modo de pensar. La nueva mentalidad y la nueva percepción del cosmos propiciaron a nuestra civilización occidental aquellos aspectos que son característicos de la era moderna. Ellos se transformaron en la base del paradigma que dominó nuestra cultura en los últimos trescientos años...” (Capra, citado por de Souza 2011, p. 4).

Esto es así en virtud de que los elementos paradigmáticos fundamentales que cimentaban el colonialismo permanecen prácticamente inmutables: el individualismo, el predominio de las lógicas mecanicista y positivista de pensamiento que ignoran o rechazan otras formas de conocimiento y compartimentalizan la vida, la idea de que es posible y necesario el progreso ilimitado y constante, la creencia ciega en la generación de riqueza y el crecimiento económico sin límite, la convicción de que es aceptable e inocuo para la humanidad apropiarse sin control de todo cuanto es parte de la naturaleza, y la idea de que es ético y propio de la condición humana imponer, sin más, el poder del más fuerte. Todos estos son componentes intrínsecos del paradigma del “desarrollo”, exacerbado en los últimos 30 años mediante la vía

neoliberal, tanto como lo fueron, con sus lógicos diversos “bemoles”, de las formas de pensamiento que “inspiraron” a las sociedades europeas colonialistas.

Así, pese al empecinamiento de las élites económicas y políticas del mundo en continuar la apuesta por el “desarrollo” en su modelo modernista y en su “método” o vía neoliberal, no nos cabe duda del manifiesto agotamiento de la propuesta desarrollista, y de la necesidad de procurar la construcción de nuevos derroteros, acordes con las realidades específicas —culturales, geográficas, ambientales, económicas, espirituales, etc.— de los diversos colectivos humanos. Para esto, después de la necesaria deconstrucción de este paradigma de más de 300 años, se requiere construir y establecer nuevos ejes paradigmáticos que propicien la necesaria construcción de un nuevo horizonte humano. Desde esta perspectiva crítica, entonces, proponemos la necesidad de transitar hacia un cambio que permita la construcción local-nacional de formas de convivencia, organización social, manejo del poder y de la producción, propios y coherentes con las particularidades de las realidades locales, sin dejar de considerar, entender y atender los inexorables vínculos sociales y bio-ecosistémicos globales, tal y como se propone desde el denominado paradigma de la multiplicidad (Morales, 2005, p. 18).

Una perspectiva crítica de la comunicación

“Una situación de comunicación no se resuelve a través de algo tan pobre como aquello de un emisor que emite y un receptor que recibe” (Prieto, 1999).

Desde el surgimiento de los estudios en comunicación, a mediados del Siglo XX, se ha impuesto una forma de entender esta dimensión del quehacer humano que es propia del paradigma funcionalista: la propuesta desde el modelo emisor-receptor. Desde esta propuesta conceptual se asume como proceso —de manera reduccionista— el mero acto vertical-unidireccional de transmisión de información desde un emisor hacia un receptor.

Más allá de que se le hayan propuesto e incorporado diversos “ajustes”, a modo más bien de matices, con el fin de ajustarlo para poder paliar las críticas a su limitada capacidad de reflejar y explicar la realidad comunicacional de una manera integral, el concepto y el modelo se han impuesto, tanto en términos de su difusión y apropiación colectiva como en términos de su aplicación en prácticas sociales concretas. Esta “apropiación” colectiva no es, de ningún modo, casual. Un ejemplo claro de esto, en lo que representa una contundente evidencia de los modos en que opera el sistema de comunicación social para asegurar la reproducción de las lógicas y las prácticas que le son funcionales, se presenta con la forma en que se le “enseña” el concepto a niños, niñas y jóvenes de primaria y secundaria. Incluso en unidades académicas de instituciones de educación superior se sigue “enseñando” sistemáticamente este modelo, muchas veces sin que se propicie la necesaria reflexión sobre sus implicaciones epistemológicas, conceptuales y políticas.

Desde la diversidad y complejidad de elementos que componen el entramado social y el sistema de comunicación en el que se asienta, se ha asegurado la constante asimilación-aceptación “mecánica” (reproducción) de esta forma particular de “entender” y aplicar la comunicación, donde, en un momento comunicativo particular, sin importar el contexto ni la historia que lo explica, se acepta, cuando no es que se requiere, la figura del “emisor” privilegiado (se acepta, sin cuestionamiento, que “el presidente” o el jefe deciden, que el cura o el pastor son dueños de la palabra, que el policía o el militar ordena, que la maestra o el maestro, el profesor o profesora, tienen la razón, que los medios y los/las periodistas sean protagonistas...) (17).

Nuestras dinámicas sociales-institucionales, y en buena medida incluso nuestras prácticas cotidianas, en los espacios más interpersonales, tienden a reflejar y reproducir una comunicación sustentada en el modelo “emisor-receptor” (18). La comprensión de la comunicación desde este modelo impide la visualización de la comunicación desde otras posibilidades —por ejemplo, desde la lógica dialógica, que se refleja como interactiva, esencialmente colectiva (en tanto precisa de la interacción y la interlocución) y supone la asignación de valor signifiante a la dimensión del proceso por encima del mensaje-producto. Este impedimento se construye a partir de la asimilación y aceptación tácita, que se da por la vía de la reproducción

desde las prácticas sociales, de una serie de lógicas profundas, que subyacen al modelo y que tienen un profundo sentido epistemológico y político:

- La lógica de la existencia y acción de “un” emisor privilegiado, que, como tal, resalta el individualismo y asume un rol privilegiado (por tener el poder de emisión), lo cual redundando en la aceptación expresa de ese privilegio, y, como contrapeso, expresa la existencia de un “receptor” esencialmente pasivo, cuya función es recibir y aceptar lo que proponga ese emisor privilegiado; de este modo, se impone la aceptación de una jerarquía emisor-receptor que es absolutamente arbitraria y esencialmente excluyente. Desde acá, a partir de la aceptación de roles diferenciados de emisor o receptor, propicia la asimilación (aceptación) de roles sociales diferenciados expresados en la dicotomía “inferior-superior”, “rico-pobre”, “concedor-ignorante”, “poderoso-débil”, “bendecido-desdichado”.
- La lógica de “un” mensaje —producto comunicacional acabado—, que invisibiliza la dinámica procesal dialéctica desde la que, en definitiva, se propicia la construcción social y significativa de ese mensaje, y que comporta tanto o más que el mensaje mismo, una enorme carga significativa.
- La lógica vertical-autoritaria-excluyente de la transmisión, que violenta el abordaje dialéctico-hermenéutico del encuentro humano, inhibe las posibilidades de la comunicación dialógica que es la base fundamental de la acción comunicante y excluye la participación del “otro”/la “otra”, en tanto supone la existencia de un único polo emisor.
- La lógica de primacía del “aparato” o medio tecnológico que vehiculiza el mensaje para que pueda ser “receptado” por “el” individuo receptor o perceptor (que, como tal, es intrínsecamente pasivo) y del que se espera que actúe en correspondencia con ese mensaje, construido según las necesidades e intereses del emisor; la primacía del aparato o medio acentúa arbitrariamente la dimensión técnica de la comunicación y, en función de este “asombro tecnologicista”, desvaloriza (provoca que se obvie o se ignore) la dimensión humana de la interlocución cara a cara, provocando que muchas veces ni siquiera se considere como opción comunicativa ⁽¹⁹⁾.
- La lógica reduccionista de la dimensión procesal propia de la comunicación, derivada de la consideración de que el mero “acto” entre emisor y receptor o perceptor constituye un proceso en sí mismo, lo que contribuye a legitimar la exclusión de la historia y de la cultura dentro de los cuales se inscribe cualquier acto humano. De esta manera, se reniega de la condición social-colectiva del proceso significativo —cultural e histórico— que se expresa en el contexto concreto dentro del cual se inscribe el acto de vinculación entre los sujetos participantes de todo acto comunicativo.

De alguna manera, la imposición (por la vía de la aceptación-reproducción) de estas lógicas en la comunicación social no solo se “encuentra”, sino que se complementa, con la propuesta modernista de “desarrollo”, que impone sus lógicas en tanto se

propone como meta universal absoluta) y conduce a la reproducción y legitimación social, desde lo cual se asume como normal o “natural” la aspiración por el “desarrollo”.

En este sentido, coincidimos con Daniel Prieto cuando afirma que “una situación de comunicación no se resuelve a través de algo tan pobre como aquello de un emisor que emite y un receptor que recibe. Estamos siempre inmersos en un todo significativo que se manifiesta por medio de distintos discursos, los cuales pueden contradecirse, sin dejar de pertenecer por ello al todo. Una situación de comunicación comprende las relaciones intrapersonales (yo conmigo mismo), grupales, sociales en general; las circunstancias económicas, políticas, culturales, el desarrollo de ciertas tecnologías, de ciertas formas de enfrentar y resolver los problemas de la naturaleza y la sociedad” (Prieto, 1999, p. 81).

Es claro que el modelo funcionalista comporta en sí mismo una propuesta contundentemente política e ideológica de carácter autoritario e impositivo, pero, más que eso, comporta una propuesta de reproducción de las condiciones que se requieren para asegurar el sostenimiento de un sistema social que acoge esas formas de relación y de ejercicio del poder. Con esto, no solo se ha reducido la comprensión de la comunicación como dimensión sustantiva, articuladora y, a la vez, productora y re-productora del quehacer humano, sino que, además, se ha limitado la posibilidad de “mirarle” y aplicarla en todo su potencial transformador.

A partir de este cuestionamiento al modelo y a la concepción funcionalista, desde una perspectiva crítica y —acá sí— de proceso, y en un abordaje amplio, entendemos la comunicación como “un proceso social, en constante transformación y recreación, mediante el cual se producen, se distribuyen, se intercambian y se consumen significados” (Amador, 2007). Desde esta perspectiva crítica, se puede afirmar que “la comunicación es tanto intercambio e interpretación (consumo, atribución y reproducción de significados) como transformación y construcción (construcción de “nuevos” significados, saberes y prácticas); es vehículo de mediación entre la persona, en su condición social, “forjada” en un determinado contexto histórico y social, y “el mundo” que le rodea. En su condición de vehículo de mediación y representación, la comunicación es determinante en todos los procesos humanos, ya que le permite a la persona, en un sistemático y permanente encuentro con “los otros/las otras”, “forjar” y asignar significados sociales determinados a los objetos, seres vivos, procesos y prácticas humanas que le rodean, permitiéndole asegurar el intercambio y la inter-acción necesarios con su entorno. La comunicación es, tanto a nivel individual como colectivo, una dimensión fundamental para que, en el reconocimiento y encuentro con el mundo, las personas y los grupos adquieran las herramientas prácticas cognoscitivas que le permiten adaptarse y transformar el mundo, de acuerdo con aquello que consideran sus necesidades e intereses, construidos al lado de las necesidades e intereses de la colectividad. La comunicación es, por una parte, condición para vivir en sociedad, pero es, a la vez, herramienta que vehiculiza la capacidad individual y colectiva para transformar la “realidad”, y es, por lo tanto, poder” (Amador, 2007).

La adopción de una propuesta de comprensión de la comunicación como la anterior permite explicar y entender no solo el acto específico de comunicación, que se concreta en el encuentro de interlocutores diversos, sino que, y ante todo, permite comprender la dimensión de proceso social dentro del cual adquiere significación dicho acto, de acuerdo con las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas concretas en que se manifiesta la circunstancia que propicia dicho acto.

Asumir la comunicación desde esta concepción crítica no solo nos permite comprender la función esencial de la comunicación en la dinámica social, como re-productora de las lógicas y dinámicas que precisan la sociedad y los colectivos para asegurar su sostenimiento en el marco de un orden de relaciones y de producción particular (es decir, del orden establecido), sino que, además, nos da lugar para procurar, en el ejercicio de “producción significativa”, la “de-construcción” de las lógicas (reflejadas en las prácticas y discursos sociales) y la posibilidad de la construcción de nuevas prácticas, nuevos referentes, nuevos elementos significantes, coherentes con el cambio requerido para la forja de una sociedad “mejor” y más humanizada.

La concepción de comunicación para el desarrollo y el cambio social

“Los sujetos sociales son artífices de tales procesos histórico-culturales. Y no por los hechos excepcionales de los que participan, sino fundamental y primariamente por lo que protagonizan en la vida cotidiana” (Uranga, 2007).

Por más de 70 años, desde que por allá de la década de los 40 se propuso y se impuso la idea del “desarrollo” como aspiración fundamental de las sociedades modernas, hemos asistido a una dinámica que, a partir del engranaje de las diversas instituciones que conforman el entramado del sistema social-comunicacional (la familia, la religión, la educación formal, los medios, las organizaciones, el Estado y el aparato público) nos ha “impuesto”, sin darnos la posibilidad de acceder a otros referentes posibles, la idea del “desarrollo” como aspiración máxima o última ⁽²⁰⁾:

“La construcción de “sociedades desarrolladas” requiere una “comunicación para el desarrollo” y una “educación para el desarrollo”. Cuando las “sociedades subdesarrolladas” no lograron “ser desarrolladas”, emulando el modelo de las “sociedades desarrolladas”, surgieron otras propuestas sobre cómo “desarrollarse”, inspiradas en el significado de adjetivos propuestos al “desarrollo”, que debería ser participativo, endógeno, autónomo, sostenible, local, territorial (...). Sin embargo, todos aceptan la premisa de que el “desarrollo” es la meta común a todos. Por ejemplo, cuando el grupo de Países No-Alineados propuso el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) en 1973, propuso también un Nuevo Orden Mundial para la Información y las Comunicaciones (NOIC), para el “desarrollo” (de Souza Silva, 2011, p. 7).

Nuestras sociedades se evidencian en sus lógicas y aspiraciones desarrollistas, seguimos orientados por las expectativas de un progreso continuo y sin fin, por el crecimiento económico constante y la perspectiva de evolución hacia estados

“superiores” de “bienestar”, todo lo cual constituye una suerte de perversidad ante las contundentes constataciones de los límites mesurables de esta racionalidad, tanto a nivel de las dinámicas económico-financieras como en cuanto a la base de recursos de la naturaleza que la sustenta y de sus requerimientos energéticos. ¿Cómo es que, a pesar de las contundentes constataciones de los males arrastrados por el desarrollismo y de los límites materiales, cada vez más cercanos, de esta propuesta de meta universal, seguimos arrastrados por sus espejismos?

En atención a lo anteriormente dicho, antes de entrar a plantear nuestra perspectiva respecto a la CDyCS, consideramos que la comprensión del papel que ha tenido o que puede tener la comunicación en sus vínculos con los procesos de “desarrollo” debe verse, en primer término, en cuanto opera, tanto desde las estructuras comunicacionales fundamentales (el sistema de medios o el discurso institucional público o privado), como desde los espacios grupales y las dinámicas de lo cotidiano, para cumplir la función de reproducir y legitimar un modo de pensar y actuar —una cultura— coherente con el modo dominante de entender y asumir el modelo.

En este sentido, seguimos a de Sousa Silva cuando señala que “a cada modelo de sociedad corresponde un modelo de comunicación y un modelo de educación para construirla” (2011, p. 7). Y, además, agregamos que, así como a cada sociedad y a cada modelo de “desarrollo” le corresponde un modelo de comunicación, cada práctica humana refleja (o se corresponde con) una forma particular de concebir la comunicación. Cada sistema social, a propósito de sus formas particulares de organización establecidas para asegurar la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios que atienden las diversas necesidades sociales, refleja en sí mismo, por un lado, y reproduce, por otro, una forma particular de comprender —y ante todo, de asumir en la práctica— la comunicación. Del mismo modo, cada sociedad, cada organización social y cada forma de proponer y entender el “desarrollo” se propone en “una” forma particular de entender la comunicación.

Además de imponernos la idea del “desarrollo” como aspiración colectiva máxima, este engranaje de la comunicación social nos ha impuesto el modelo de la comunicación centrada en el emisor privilegiado que transmite su mensaje a los demás. Y cada una y cada uno de nosotros no solo vive inmerso en esta dinámica comunicacional, sino que actúa, consciente o inconscientemente, desde que nacemos y a lo largo de nuestras vidas, a modo esencialmente reproductor de esta fórmula comunicativa. Vivimos permeados de una dinámica comunicacional que se fundamenta y se reproduce constantemente en la lógica de la comunicación funcionalista, tal y como lo expone de Souza (2011, p. 13):

“¿Qué comunicación y qué educación podrían surgir de un contexto histórico desigual plagado de relaciones asimétricas de poder, concebidas a partir de la visión mecánica de mundo dominante en aquella época? ¿Qué comunicación y qué educación podrían emerger para viabilizar la “idea de progreso/desarrollo” como meta universal? La comunicación y la educación descontextualizadas —homogeneizadoras— que tenemos, y no la comunicación transformadora y la educación liberadora que queremos. La concepción de la comunicación y la educación descontextualizadas tuvo inicio en el periodo del colonialismo imperial, a partir de la Revolución Científica

que matematizó la experiencia humana, facilitando la consolidación del capitalismo —indiferente— emergente. En el presente, su persistencia es explicada por los intereses del vencedor de la Segunda Guerra Mundial y sus aliados, cuya estrategia del imperialismo sin colonias depende enteramente de técnicas refinadas de dominación, incluyendo la de la colonización cultural, que incorporan el uso de la comunicación y la educación como medios para su reproducción”.

Más allá de categorizaciones basadas en las escuelas teóricas o en los enfoques formales, se puede decir que las propuestas de comunicación y desarrollo se ubican en dos grandes vertientes de pensamiento. Por un lado, está el planteamiento del difusionismo, que corresponde a la propuesta comunicacional del modelo modernista de “desarrollo”. Para el difusionismo, que comporta una lógica eminentemente vertical, la comunicación se asume como herramienta técnica, desde la cual se “hacen llegar” (imponen) contenidos desde determinados emisores, con los cuales se busca generar cambios orientados a reproducir prácticas y lógicas de producción consecuentes con los estilos de vida, la visión y los intereses de los países denominados “desarrollados”.

Es necesario señalar que el concepto de comunicación derivado del modelo funcionalista es plenamente coincidente y consistente con la propuesta difusionista de comunicación para el desarrollo, y que, además, los vacíos señalados antes para el caso de dicho modelo aplican de manera directa también para la propuesta difusionista. Por lo tanto, en consecuencia con el abordaje crítico antes propuesto para la comprensión de la comunicación, extendemos a la propuesta difusionista las críticas planteadas antes para el concepto funcionalista de comunicación.

Por otra parte, están aquellos planteamientos que se proponen como cuestionadores o contestatarios al modelo modernista, así como a las estructuras productivas y a las lógicas de poder que le son propias. Estas propuestas asumen a la comunicación como herramienta para la transformación o el cambio de esas estructuras productivas y lógicas de poder, por lo cual, más que como herramienta meramente técnica, se atribuye a la comunicación una dimensión política, en tanto desde ella se procura el reconocimiento, por parte de los sujetos sociales, de las tensiones y contradicciones de la realidad, para que, desde allí, se propicie la reflexión para el cambio en la visión de mundo y se promueva la acción requerida para la transformación ⁽²¹⁾. En este plano ubicamos el enfoque de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social.

La Comunicación Participativa como asiento de la CDyCS

“Los principales componentes que caracterizan a la comunicación participativa se relacionan con su capacidad de involucrar a los sujetos humanos del cambio social en el proceso de comunicar” (Gumucio, 2001).

A propósito del reconocimiento de la dimensión política que es propia de la CDyCS, también en correspondencia con el planteamiento crítico propuesto antes para la

comunicación, proponemos una comprensión de la CDyCS que tiene como asiento a la comunicación participativa, la cual comporta el encuentro de dos términos — comunicación y participación— cuyos acepciones son esencialmente las mismas.

La comunicación participativa supone una propuesta epistemológica radicalmente diferenciada respecto a la subyacente en la propuesta difusionista, en tanto asume a la participación misma como comunicación, dado que comporta una forma particular de entender y asumir la relación y el encuentro significativo entre quienes se involucran en un determinado espacio, para que desde allí, se propicie la correspondiente acción comunicadora que propicia el cambio. Y, desde la lógica participativa, el encuentro dialéctico con “los otros/las otras” supone un momento de construcción de nuevos saberes y significados, los cuales solo son posibles de alcanzarse a partir de ese encuentro. En este sentido, tiene una evidente cercanía con la propuesta de generación de conocimiento derivada de la propuesta de “Investigación-Acción Participativa”. En esta propuesta de comunicación participativa, el nuevo saber, construido y/o enriquecido con el saber “de los otros/o las otras”, carece de sentido en sí mismo, y solo lo adquiere en la intencionalidad y la acción transformadora. Por un lado, porque la adquisición del nuevo conocimiento supone, ya de por sí, una transformación y a la vez un empoderamiento del sujeto, derivados del nuevo conocimiento, y por otro lado, porque, en la apuesta colectiva del proceso, supone y aspira al emprendimiento también colectivo para la acción orientada al cambio.

Así, mientras el funcionalismo, y por derivación, el difusionismo, proponen la existencia de “un” conocimiento “objetivo” consistente con “una” realidad y “una” verdad absoluta, que es potestad y patrimonio de un emisor (privilegiado), de quien debe recibirse para reproducirse y actuar según esa verdad, la comunicación participativa supone una construcción colectiva del conocimiento, basada en saberes individuales diferenciados, forjados a partir de las realidades concretas y específicas de cada individuo, los cuales se someten al encuentro dialógico para que, de ese encuentro, se forje un “nuevo” conocimiento, enriquecido, entonces, con los saberes de todos/todas. Se trata, entonces, de un conocimiento cualitativamente diverso y amplio, pues, antes que la intervención de un actor que trae consigo el conocimiento, supone el involucramiento de todos/todas en la dinámica colectiva que facilita esta nueva construcción.

La comunicación participativa “entiende” las diferencias individuales, derivadas de la condición individual que tiene todo sujeto como consecuencia de su condición histórica y particular; a partir de esta comprensión, supone el respeto por la diferencia, pero procura la inclusión para invitar al aporte colectivo porque entiende que en la inclusión subyace la riqueza del conocimiento construido o por construir. En este sentido, plantea una ruptura estructural con la propuesta difusionista en tanto cuestiona la existencia de un único saber objetivo que es potestad de un “individuo” (el emisor privilegiado), y privilegia la dimensión colectiva de la construcción del conocimiento.

La comunicación participativa se puede describir a partir de lo que Gumucio (2001, p. 37) expone como el perfil propio de este tipo de comunicación:

- es esencialmente democrática, por invitar a la participación activa y colectiva para la toma de decisiones (en contraste con la propuesta vertical y autoritaria

del modelo difusionista, que parte de la existencia de un emisor privilegiado, “dador” de la verdad);

- es respetuosa de las identidades particularidades, tanto individuales como colectivas (en contraste con la propuesta de visión y perspectiva absolutista — norte-centrista—, propia del mundo del emisor privilegiado que plantea el modelo difusionista);
- es esencialmente horizontal, apuesta al aporte colectivo para la construcción también colectiva (en contraste con la propuesta vertical del modelo difusionista, centrado en la transmisión y/o transferencia de contenidos);
- privilegia la lógica de proceso y entiende su valor histórico, dialéctico y significativo, antes que al producto-mensaje (como ocurre con la propuesta difusionista, que centra su interés en los productos);
- comprende la necesidad de apostar al largo plazo para procurar las transformaciones requeridas (a diferencia del perfil de corto plazo que, de la lógica del producto y de la expectativa de resultados basados en contenidos impuestos, plantea el difusionismo);
- refleja y respeta una lógica esencialmente colectiva y solidaria, porque defiende y promueve los intereses de la colectividad antes que la competencia y los intereses los de individuos específicos;
- supone una lógica de trabajo y acción con las personas, antes que una acción para las personas; así, privilegia el involucramiento antes que la intervención;
- apuesta a la consideración de las particularidades de los grupos y/o comunidades, antes que al abordaje masificado propuesto por el modelo difusionista;
- apuesta a la comprensión de la realidad, como base de la toma de conciencia que conduce a la acción, antes que a la mera persuasión que exagera las motivaciones infundadas o carentes de sentido y fundamento.

Desde esta perspectiva, los medios cumplen la función que les corresponde: la de ser medios o vehículos para propiciar el encuentro implícito en la lógica participativa, contrario a lo que ocurre en nuestras realidades, y en las propuestas difusionistas, donde los medios llegan a adquirir roles de protagonistas y objetivos en sí mismos.

En tanto está orientada al cambio y a la transformación, la comunicación participativa no puede desligarse de sus vínculos con la acción, y parte de la premisa de que es preciso procurar de-construir la comunicación predominante (las lógicas, prácticas y explicaciones propias de la apuesta desarrollista o modernista), para proponer una comunicación basada en los/las interlocutores y en la lógica de la interacción, con énfasis en la acción más que en el mensaje mismo.

Academia y CDyCS: Encuentro y Desencuentro (el necesario aterrizaje epistemológico)

La propuesta de la comunicación participativa orientada a la acción transformadora refleja con claridad una postura epistemológica y, desde allí, por tanto, también política. En este sentido, y en principio, supone una aparente ruptura, o al menos una diferencia sustantiva, con el paradigma positivista que ha sido el eje estructurante de la academia occidental. Desde la propuesta de la comunicación participativa orientada a la acción transformadora, como se ha mencionado, el conocimiento —al

menos en lo que respecta al campo de la CDyCS— no debe, no puede, construirse al margen del hacer mismo. Se hace, se construye, en la dialéctica de la acción, que se da, primero, en el vínculo con la realidad concreta, y segundo, en y por la dinámica colectiva. De alguna manera, esta propuesta implica una “humanización” del proceso de construcción de conocimiento. Es decir, no es posible pensar a la comunicación participativa orientada a la acción transformadora desde el escritorio del productor, o del diseñador, o del escritor, o del investigador, de manera aislada y desligada de la acción concreta vinculada a la realidad también concreta. ¿Es posible conciliar estas diferencias?

No creemos que la cuestión pase, ni mucho menos, por una ruptura, que, en todo caso, resulta evidentemente inviable dado el peso que tiene la estructura académica tradicional. Más bien, apostamos por que la academia facilite una apertura a las posibilidades de las formas de construcción de conocimiento basadas en métodos cualitativos y en las lógicas participativas, así como la consecuente forja de condiciones que permitan la convivencia de los diversos modos posibles de entender y aplicar la generación de nuevo conocimiento.

Comprendida esencialmente como “las formas de entender el conocimiento, su producción y su uso” (Martínez y otros, 2012, p. 20), la epistemología nos obliga a pensar en el ejercicio desde el cual procuramos producir (construir) conocimiento y ponerlo al servicio de determinadas intencionalidades. La perspectiva epistemológica coherente con la perspectiva comunicacional acá propuesta obliga a pensar la construcción del conocimiento en vinculación con los otros/las otras; obliga a comprender que la historia, la cultura y las particularidades colectivas imponen y expresan lógicas que hacen discutible la opción por formular principios y leyes generalizantes y/o universales; impone la comprensión de que, además de las vías basadas en el método científico, es necesario conceder legitimidad a otras formas de conocimiento y otras perspectivas de realidad, pues solo de esa manera se es coherente con la posibilidad de democratizar la acción y el conocimiento, y por tanto, el poder.

Al inicio de este apartado preguntábamos acerca de si era posible pensar a la CDyCS sin entender que, sea como sea que se le entienda, es un sinsentido desligarla de la intencionalidad transformadora, y nos preguntábamos acerca de cómo entender esta vinculación con la acción transformadora para el caso de la unidades de estudios universitarios que tienen a este campo de la comunicación como objeto de “estudio”. Ante esa interrogante, a lo largo de esta reflexión hemos querido proponer que, si aceptamos la premisa de esta vinculación consustancial que, desde la perspectiva acá propuesta para la CDyCS, guardan comunicación y acción transformadora, la academia necesariamente debe aceptar y facilitar la apertura de espacios para estas formas particulares de emprender el acercamiento al conocimiento y, por tanto, como una implicación axiológica, también con el compromiso para el hacer, y esto implica, necesariamente, una postura claramente política que obliga a precisar con quiénes, para qué y de qué modo se hace comunicación y se genera conocimiento.

En algún momento, el connotado novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias, ganador del premio nobel de literatura, dijo que “el escritor no puede escribir ni mantenerse al margen de su realidad”. Así, del mismo modo, ya sea desde la academia o desde el ejercicio activo, si entendemos que el abordaje de la CDyCS supone una vinculación con la acción para el cambio, tenemos que entender y

asumirnos como “comunicadores/as comprometidos con el cambio, lo que implica que no podemos permanecer como actores “neutrales”, acusando inconsciencia o displicencia de nuestro propio hacer. Estamos llamados a revisarnos y a proponer una comunicación diferente, vinculada a la acción y basada en el intercambio, la inter-acción y la acción colectiva para procurar el cambio orientado a la construcción de una sociedad verdaderamente humanista.

IV. Conclusiones

La MCyD-UCR) inició funciones en el 2010, en un contexto marcado por la tensión social y los efectos derivados de más de 25 años de aplicación del modelo neoliberal en el país. En ese contexto, ante el surgimiento de diversas manifestaciones sociales organizadas, se evidenció la carencia en la formación de profesionales en comunicación que, más allá del perfil profesional demandado por el mercado forma, desde la lógica y las posibilidades de la CPyCS, pudieran asumir los retos comunicacionales planteados ante las tensiones sociales y las exigencias.

En términos generales, y particularmente a nivel de “la” academia, el abordaje de la CDyCS supone una obligada reflexión sobre su concepción misma, pero ante todo, sobre los métodos y sobre la dimensión epistemológica —por tanto, política— desde la cual se le aborda. Si la CDyCS supone una necesaria vinculación con la acción orientada al cambio o la transformación, los espacios de la academia que asumen como su objeto este campo de la comunicación estamos llamados a propiciar una obligada reflexión sobre con quiénes, cómo y para qué proponen el acercamiento al conocimiento. Desde este posicionamiento, se plantea la necesidad de asegurar la apertura de espacios para facilitar la inclusión, como parte de sus propuestas metodológicas, de los procesos de comunicación participativa e investigación-acción, de manera que complementen los métodos académicos convencionales.

Esta necesaria reflexión tiene que llevar a comprender las lógicas reproductoras, convenientes para el “estatus quo”, que reflejan el modelo funcionalista, basado en la lógica del emisor-receptor, y el correspondiente modelo difusionista, que le derivó como propuesta comunicacional del modelo modernista impuesto desde las perspectivas e intereses de los países industrializados del norte. A la vez, exige el abordaje de una perspectiva crítica sobre la comunicación, que permita rescatar la dimensión de proceso que le es inherente, así como la condición de sujeto histórico y político de los individuos vinculados a los procesos y actividades, en general, y particularmente a los de carácter comunicacional.

Si la comunicación participativa, pensada para el cambio social, requiere ser considerada en su vínculo directo con la acción, estamos llamados a proponer espacios de “de-construcción” de las prácticas imperantes, reproductoras de las lógicas del individualismo, el autoritarismo, la reproducción por el consumo irracional, el desinterés por la historia, la cultura y el contexto particulares, y la legitimidad de la primacía de emisores especializados-privilegiados, para proponer lógicas basadas en la construcción y los intereses colectivos, en el intercambio y la inter-acción, y en el reconocimiento y respeto de las diversidades. En esto, desde la academia, en general, y particularmente desde la que centra sus intereses en la CDyCS, tenemos una responsabilidad y un reto particularmente preponderantes.

Notas

1. A inicios del 2014, el país pasó por un proceso electoral que llevó al gobierno al “Partido Acción Ciudadana”, de línea socialdemócrata. Desde 1982, se venían turnando en el ejercicio del poder el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ambos de ideología claramente neoliberal (aunque el PLN, antes de ese año, había sido el abanderado de la social democracia y del proceso de reforma que condujo a la implementación del “Estado Benefactor”). De este modo, por primera vez después de más de 30 años, el país tiene en el ejercicio del gobierno a un partido que, desde sus postulados, cuestiona el modelo. Qué cambios impulse y esté en capacidad de lograr respecto a lo que venía imponiéndose como parte del modelo neoliberal, está por verse.

2. Hay que señalar que el Partido Liberación Nacional procedía de una tradición socialdemócrata y, desde allí, no solo había promovido la participación estatal en la economía, sino que, como partido y con sus principales figuras políticas, había sido actor preponderante en las reformas de finales de los años 40 y en la forja del “Estado Benefactor”. Por lo tanto, la acogida del neoliberalismo en 1982 significó un quiebre abrupto con la propuesta originaria de ese partido.

3. Se debe tomar en cuenta que los datos sobre los cambios en los porcentajes de familias pobres acá consignados, y tomados de Román 2010, deben entenderse como aproximaciones, dadas la fragmentación de la información disponible y las limitaciones existentes para poder acercar las diferencias metodológicas de medición. Está claro que los estudios sobre pobreza en el país se concentran en las últimas tres décadas del Siglo XX y, aunque se carece de datos empíricos, la descripción de los entornos comunitarios, las limitaciones de acceso a servicios públicos por parte de la generalidad de la población (como salud, educación, agua potable) y los “problemas” económicos del aparato público arrastrados desde la crisis del 29 y en el marco del proceso de “guerra” (alto déficit fiscal, aumento de la deuda externa, hacen suponer que, con toda seguridad, los índices de pobreza previos a la década del 40, disminución del crédito interno y del dinero circulante, y aumento del costo y escasez de muchos productos importados, algunos de consumo básico) que caracterizaban el inicio del proceso de reforma, superaban con creces el 80% de la población.

4. La adopción de un esquema de graduación en la aplicación de las políticas obedeció, más que a un interés de progresión en la reforma por parte de las cúpulas de las clases políticas, a una estrategia orientada a evitar la posible conflictividad social que podría causar la adopción de una fórmula más abrupta. Algunas de las posibles razones que explican la adopción de este carácter gradual son las siguientes:

Primero: existía una fuerte organización sindical en el sector público, lo que conllevó a la necesidad de negociar con estos sectores todo lo que podría afectar al empleo público y la política salarial; estas negociaciones permitieron un cierto nivel de “consenso” político para la implementación de las medidas (Trejos y Villalobos, 1994).

Segundo: a la par del peso del movimiento sindical, existía una gran sensibilidad social respecto a algunas instituciones públicas forjadas a lo largo del período anterior, que constituían un importantísimo referente simbólico-social, y que no podían cambiarse de la noche a la mañana. Tal era el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución proveedora de servicios de salud desde un enfoque solidario, creada precisamente en el período anterior. De una cobertura en salud de apenas el 8% de la población en 1950, la CCSS pasó a una cobertura del 70% de la población en 1980 (Román, 2010, pág. 151).

Tercero: la propia burguesía industrial nacional demandó un proceso gradual y selectivo, particularmente en lo que correspondía a las tarifas de servicios públicos (muchas de ellas subsidiadas) y en la devaluación monetaria. Esto se dio en virtud del carácter esencialmente doméstico de la producción generada por este sector, y en el temor de entrar a competir abruptamente en el mercado internacional (Arias y Muñoz, 2007, p. 10).

Cuarto: la inestable situación política en Centro América, y el interés de “Washington” por mostrar al país como ejemplo de democracia y estabilidad social, a la par del resto de naciones de la región, supuestamente desestabilizadas por la presencia de los intereses socialistas, contribuyó para que Costa Rica recibiera un trato preferencial no sólo de parte del gobierno de Estados Unidos, sino también del FMI y el Banco Mundial (Arias y Muñoz, 2007, p. 10).

5. A pesar de la aplicación de diversas políticas para desincentivar el empleo público, entre las que destacó la denominada “movilidad laboral”, a fines de los 80, mediante la cual se “invitó” a los empleados públicos, sin criterio alguno, a renunciar a sus puestos a cambio de diversos incentivos, el empleo público no se redujo en números absolutos, sino que ha crecido en mucho menor medida que el empleo en el sector privado (Castro y Gutiérrez, 2007).

6. Aunque esta relativa estabilidad en el crecimiento económico (de carácter moderado) podría leerse como un resultado positivo de la aplicación del modelo, y aunque no se dispone de datos aplicados específicamente para el país, vale la pena considerar los resultados relacionados con este particular, pero desde una mirada de totalidad en América Latina: según un informe de 1995 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que en 1960 Latinoamérica participaba del comercio mundial con el 9% de las exportaciones mundiales, para 1994 (14 años después de vigencia del modelo) este porcentaje se había reducido al 3,6%, de manera que, en vez de crecer en volumen, incrementó su participación marginal en el mercado mundial (Brieguer, 2002).

7. Han sido casos emblemáticos la producción de banano, en la zona Atlántica, y la producción de piña, asentada primero en la Región Brunca, al Sur del país, y luego extendida a las zonas Huetar Norte y Atlántica. En el primer caso, la arremetida neoliberal, con el ímpetu de promoción de exportaciones, llevó a que, entre 1987 (año de promulgación del “Plan de Fomento Bananero”) y 1994, el área en producción pasara de 28 mil a 52 mil hectáreas (Zeledón, 2000, p. 4). En el caso de la piña, se afirma que, con el impulso neoliberal, la producción de este cultivo “creció en 20 años lo que el banano en cien”, ya que, pasó de unas 500 hectáreas a mediados de los 80, a más de 42 mil hectáreas para el 2008.

De acuerdo con la “Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica” (PROCOMER) —una entidad pública de carácter no estatal, creada en 1996 y que es básicamente producto de la lógica exportadora derivada del modelo, que tiene a su cargo la promoción de las exportaciones costarricenses— (PROCOMER, sitio web), para el 2014 Costa Rica es:

- El primer exportador de piña fresca del mundo.
- El tercer exportador mundial de banano.
- El cuarto exportador de yuca del mundo.
- El tercer proveedor de melón de los Estados Unidos y el primer proveedor de la Unión Europea (durante la temporada de invierno en el hemisferio norte).
- El principal suplidor de Estados Unidos de chayote y raíces tropicales.

Algo que PROCOMER no indica en sus estadísticas es que, como contrapartida, el país también es campeón mundial en consumo de agroquímicos. Según el World Resource Institute (WRI), para el 2009 el país consumió 51 kilogramos (kg) de ingrediente activo por hectárea (Ha) agrícola por año, seguido a la distancia por Colombia, que consumía 16,7 Kg por Ha (Kisocos Ambientales-UCR, sitio Web, 2009).

8. En Costa Rica, las organizaciones sindicales han tenido una fuerte presencia en el sector público, no así en el sector privado. Por razones históricas, el único espacio privado en el que ha habido presencia significativa de la organización sindical ha sido el sector bananero.

9. El primero de ellos, las manifestaciones de oposición al “Combo ICE”, consistió en una reacción social popular, más o menos espontánea, que se generó como protesta ante la aprobación en la Asamblea Legislativa, de manera irregular, de la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”, a la cual se le denominó popularmente “El Combo ICE”, debido a que trazaba las líneas para la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución que tenían las funciones, desde su creación en 1949, de rectoría en la generación eléctrica y telecomunicaciones.

El “Combo ICE” fue una de las leyes derivadas de un “mal habido” proceso de supuesta concertación nacional, convocado en 1998 por el entonces presidente de la república, Miguel Ángel Rodríguez. En su momento, se convocó a participar en este proceso de concertación a múltiples sectores nacionales. Por él pasaron diversas propuestas, que fueron discutidas y atendidas por los diversos actores participantes. Sin embargo, al final del proceso, el gobierno “torció” los acuerdos de manera que se “acomodaran” a los intereses privatizadores, razón por la cual dicho proceso perdió legitimidad social, particularmente de los sectores opuestos a los intereses a la privatización de las instituciones estratégicas del sector público.

A pesar de la pérdida de legitimidad, el gobierno continuó con sus intenciones. En el caso de esta ley, pese a contar con el apoyo legislativo suficiente (teniendo el apoyo de los diputados de su propio partido —el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC—, así como de los diputados del PLN, entre otros) el gobierno se aseguró de que agilizar el trámite legislativo para la respectiva aprobación, incluso violentando el reglamento legislativo. El diputado independiente del partido Fuerza Democrática, José Merino del Río, que se oponía a la aprobación de la Ley, denunció públicamente las irregularidades cometidas en el procedimiento. Sus denuncias calaron en una parte importante del colectivo nacional, en buena medida indispuestos por los múltiples deslices de los gobiernos, y esto generó una reacción popular sin precedentes, que incluyó cierres de vías a lo largo y ancho de todo el país, que quedó paralizado durante más de tres días. Al inicio, el gobierno ordenó la represión policial de las manifestaciones, lo cual caló más y más los ánimos y exacerbó el volumen de la reacción social. Al final, ante el temor de que la violencia se elevara a niveles incontrolados, el gobierno desistió de la presencia policial y, finalmente, retiró el proyecto de ley de la corriente legislativa.

10. Llama poderosamente la atención el hecho de que, desde mediados de los años 90, en parte debido a los relativamente altos índices sociales, las agencias de la Cooperación Internacional han venido, poco a poco, pero de manera sistemática, abandonando el país, de manera que las organizaciones sociales tienen cada vez menos espacios para obtener recursos para financiar sus actividades. A pesar de esto, sigue suscitándose, hasta hoy, una gran presencia de organizaciones sociales de todo tipo.

11. La primera universidad privada del país —la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA)— se fundó en 1975. No fue sino hasta 10 años después, en 1985, cuando apareció una segunda universidad privada. Después de eso, la oferta privada se disparó hasta alcanzar más de 40 universidades a inicios de la década de los 90. En el caso del sector público, la quinta universidad tardó prácticamente 30 años en aparecer, ya que fue inaugurada recién en el 2009.

12. En particular, a quien suscribe le correspondió vivenciar una experiencia de contratación, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de una agencia llamada “EDILEX”, que, entre otras tareas, se encargaba de gestionar las conferencias de prensa del Ministro. En

general, se carece de estudios que den cuenta de estos procesos de contratación, por parte de instituciones públicas, de entidades privadas que ofrecen servicios de comunicación.

13. Respecto a la presencia de este debate, hay que decir que, en un escenario político y mediático dominado por el fundamentalismo ideológico neoliberal y por la permanente ausencia de discusión razonada y fundamentada de las cuestiones nacionales, inicialmente hubo ausencia de debate público respecto a la conveniencia o no del TLC. Al igual que, en términos generales, venía ocurriendo a lo largo de los últimos 25 años con el grueso de las decisiones de política pública, y especialmente en lo tocante a temas económicos, ni el Estado ni el poder mediático se “interesaron” en promover un debate al respecto, y mucho menos en “invitar” a otros actores que no fueran ellos mismos a proponer ideas sobre la cuestión. No fue sino hasta que la sinergia generada por la reacción del movimiento social, ante la forma inconsulta, irreflexiva y fundamentalista en que se le abrió la puerta a la posibilidad de concretar el Tratado, cuando se fueron forzando condiciones para un debate público del asunto. También hay que decir que los grandes medios, que desde siempre han sido propiedad de sectores afines a la propuesta neoliberal, en general orientaron el debate hacia condiciones y posiciones favorables a su posición.

14. Lo ocurrido con la organización y la movilización popular durante el proceso de referéndum por la ratificación del TLC en Costa Rica no tiene parangón en la historia popular reciente del país. Como experiencia de organización y acción popular, merece la pena de conocerse, aunque sea de manera resumida. Originalmente, existía reticencia de los sectores opositores al TLC de participar en el proceso, ante los fundados temores de desigualdad de oportunidades en que se percibía que se daría la participación, y ante la percepción de que el “grueso” de la población apoyaría el Tratado después de 20 años de sistemática influencia mediática pro-neoliberal. En general, el grueso de los sectores empresariales (y particularmente los de mayor influencia y poder económico), el sector financiero, el gobierno y los grandes medios (que siempre han estado en manos del sector empresarial) estaban claramente a favor de la ratificación del TLC. Para colmo de males, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) —órgano responsable de ejercer la conducción y el arbitrio del proceso—, en lo que, a pesar de irregular, constituyó una clara parcialización, permitió que las figuras del gobierno hicieran campaña a favor del “Sí”, y no facilitó ningún recurso ni ninguna decisión para posibilitar el acceso de los sectores del “No” a espacios de difusión masiva. Todo esto dejaba a quienes se oponían al Tratado prácticamente sin condiciones de ejercer una oposición equilibrada, de modo que, al inicio del proceso, la derrota lucía aplastante.

Sin embargo, pese a las contundentes adversidades y diferencias, y posiblemente como una forma de reacción ante lo que constituía un descarado escenario de desigualdad apoyado desde la institucionalidad pública y las estructuras del poder político y económico, incluyendo al mismo TSE, de manera espontánea empezaron a generarse focos locales de organización y movilización para facilitar información y proponer la discusión a través de múltiples vías alternativas. El grueso de las organizaciones sociales ya existentes canalizó los limitados recursos con que contaban para producir y reproducir materiales de todo tipo: videos, música alusiva, historias respecto a los impactos y las experiencias de lucha en otros países, volantes y documentos de todo tipo. También de manera espontánea, en una suerte de sinergia que nadie tiene en claro cómo se desató, a lo largo y ancho de la geografía nacional empezaron a surgir múltiples comités vecinales, a los que posteriormente se les denominó “comités patrióticos”, los cuales se reunían todas las semanas para planificar modos y espacios diversos de información a las comunidades.

Poco a poco, y sin que existiera nada parecido a una coordinación nacional o general (a pesar de la posterior creación de la denominada “Coordinadora Nacional de Lucha Contra el TLC”, que procuró ordenar un poco las dinámicas regionales y nacionales), en el transcurso de los meses previos al 7 de octubre del 2007, fecha en que se programó el referéndum, se suscitó

una dinámica permanente de foros, sesiones de intercambio e información, charlas, conversatorios, visitas casa por casa y actividades culturales-populares, cuyos insumos y materiales generalmente no tenían un proveedor claramente identificado, pues “todos producían, reproducían y distribuían donde y cuando se pudiera”. Un rasgo especialmente destacable de este proceso lo constituyó el fuerte componente de comunicación interpersonal que nutrió la discusión y el intercambio, sin duda alentado por la imposibilidad de acceder a espacios en los medios. Hay que decir, también, que las por entonces emergentes “redes sociales electrónicas” se sumaron como vehículo alternativo, de manera que también sirvieron como plataforma permanente de intercambio y discusión, que alimentaron aquella sinergia social. Así, a partir de esta diversa dinámica colectiva, el movimiento popular se encargó de llevar coadyuvar a “digerir” el mensaje alternativo del “No” a prácticamente todos los rincones del país.

Al finalizar el proceso, el resultado final del referéndum dio por vencedor al “Sí” por un margen del 3,1% de los votos. Si bien la derrota del “No” condujo en lo inmediato a un fuerte sentimiento de desazón en los sectores adversos al TLC, y en los movimientos sociales organizados, lo cierto es que el proceso como tal terminó por poner en evidencia que el balance de fuerzas era mucho más equilibrado de lo imaginado, y que, en esta nueva etapa, los movimientos sociales disponen de muchas más capacidades de las que creían tener, así como de múltiples herramientas alternativas para procurar alcanzar los objetivos que se propone, en un contexto que exige la acción colectiva para procurar el cambio social. Por otro lado, el proceso legitimó el debate y el cuestionamiento respecto al modelo, y abrió nuevas ventanas para el posicionamiento de ideas críticas y alternativas posibles.

15. Las cosas son como son: no ha habido una apuesta real al “mercado” como vía para dirimir las cuestiones esenciales del desarrollo, no al menos en los términos esenciales planteados desde la ideología liberal; antes que eso, en general, y en particular en Costa Rica, lo que ha habido es un vuelco sistemático de la función social del Estado, que pasó a convertirse en un propulsor de la dinámica económica sustentada en la acción privada, y a dar apoyo abierto y directo a los actores sociales privados, particularmente a los sectores financiero y exportador.

16. Al momento de escribirse este ensayo, la Maestría se encuentra trabajando en la formulación de una propuesta de proyecto, orientada preliminarmente a la conformación de un “Observatorio de la Comunicación”, con la cual se espera iniciar un proceso más permanente de estudio de la realidad y de vinculación con actores sociales nacionales y regionales.

17. Al respecto, es particularmente significativo reconocer cómo este posicionamiento del modelo tradicional se refleja con contundencia en la forma en que el grueso de la sociedad acepta, sin ningún tipo de cuestionamiento, la lógica de funcionamiento del sistema mediático. No hay reparo ni cuestionamiento alguno al hecho de que sean solo esos actores sociales los que tengan el beneficio del uso discrecional y exclusivo (y, por tanto, excluyente) de los medios. En el caso de la lucha que la UCR y el colectivo de comunicadores/comunicadoras que integran la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA) de Costa Rica vienen dando desde hace 4 años por procurar una participación diversa y amplia en la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, destaca la percepción generalizada de que está “bien” tal y como están y funcionan los medios, de manera que se asume que no hay mucho qué cambiar.

18. ¿Acaso no es la propuesta tradicional de academia un ejemplo contundente de reproducción de estas jerarquías autoritarias? ¿No lo es la educación formal, en general, así

como la dinámica político-electoral dominante, la lógica del funcionamiento de la institucionalidad pública, de la organización empresarial...?

19. Como parte de mis experiencias docentes en el curso “Planificación de la Comunicación”, que me ha correspondido facilitar durante los últimos 7 años en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, he podido verificar, como constatación de esta fijación entre comunicación y “aparato” o soporte tecnológico, la apuesta mecánica y sistemática por parte de los/las estudiantes a las propuestas de estrategias de comunicación basadas en el uso de soportes tecnológicos convencionales: la radio, la tv, la prensa.

20. Para quien suscribe, resulta particularmente llamativo hacer la constatación de la sorpresa que se genera, para el caso de estudiantes de primeros niveles y niveles intermedios, el proponer la idea de que el “desarrollo” no tiene que ser la aspiración última o máxima de la sociedad. Esta “sorpresa” revela con contundencia la forma en que el sistema de comunicación social ha logrado posicionar esta idea en la forma de una verdad absoluta, sin otro referente posible, a pesar de que evidentemente no es así.

21. Daniel Prieto hace un planteamiento que concuerda con lo acá expresado cuando señala que “la comunicación para el desarrollo ha estado siempre en medio del vértigo de esa tensión: de un lado un camino abierto y sostenido por generaciones de comunicadores que han buscado salirse de propuestas directivas, cuando no autoritarias; de otro la continuidad de un paradigma apoyado en intentos de conservar grandes o míseras cuotas de poder. No creo que esa tensión desaparezca...”. Véase Prieto, 2007.

Fuentes consultadas

1. Acuña González, Guillermo (2009). La actividad piñera en Costa Rica: de la producción a la expansión, principales características, impactos, retos y desafíos. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö. San José, Costa Rica.
2. Arias, Rafael; Sánchez, Leonardo; Sánchez, Rafael (2011). Análisis de la Desigualdad Socioeconómica en Costa Rica. En: *Economía y Sociedad*, N° 39-40, enero - diciembre del 2011, pp.73-107. Recuperado en: <http://www.revistas.una.ac.cr/economia>
3. Arias, Rafael y Muñoz, Juan José (2007). La reforma económica y su impacto social en Costa Rica durante el período de ajuste estructural: apuntes críticos para el análisis. En: *Economía y Sociedad*, N° 31-32, enero - diciembre 2007, pp.5-134.
4. Amador, Marvin (2012). La comunicación en los procesos de desarrollo: esbozo de una aproximación a su comprensión. En: *Revista Herencia*, Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Volumen 25, N° 1 y 2.
5. Amador, Marvin (2011). Estudio Regional sobre el Desarrollo Local de los Cantones (Trans) Fronterizos del Pacífico Sur de Costa Rica. En: Informe Final de Investigación, Primera Parte: Presentación, Delimitación, Metodología y Dimensión Conceptual del Estudio. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö; Programa de Gestión Local, Dirección de Extensión Universitaria, Vicerrectoría de Docencia, Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica.
6. Amador, Marvin (2007). Políticas Orientadoras para la Acción Social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
7. Barranquero, Alejandro (2010). Comunicación alternativa y comunicación para el cambio social democrático: sujetos y objetos invisibles en la enseñanza de las teorías de la comunicación. Sección: Teorías y métodos de investigación en comunicación, Congreso Internacional AE-IC, Málaga. Universidad Carlos III, Madrid - Universidad Autónoma de Barcelona.
8. Botero, Adriana y Obregón, Rafael (2011). Un análisis crítico de las perspectivas de diálogo en la literatura sobre comunicación para el desarrollo y cambio social: abordajes y desafíos. En: *Signo y Pensamiento*. Volumen XXX, N° 58, enero - junio 2011. pp. 190-205.
9. Briceño, Rodrigo (2008). Gasto Privado en Salud en Centroamérica. Ponencia preparada para el Informe Estado de la Región 2008. Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Nicaragua, 2008.
10. Brieger, Pedro (2002). De la década perdida a la década del mito neoliberal. En: *La globalización económico-financiera, su impacto en América Latina* (AAVV). CLACSO, Buenos Aires.

11. Bruno, Daniela y Guerrini, Lucía (2011). Cultura y posdesarrollo: enfoques, recorridos y desafíos de la comunicación para otros mundos posibles. En: *Signo y Pensamiento*. Volumen XXX. Nº 58, enero - junio 2011, pp. 156-169.
12. Castro Valverde, Carlos y Gutiérrez Espeleta, Ana Lucía (2007). La sociedad costarricense en el cambio de siglo y las transformaciones en la estructura social. En: *Transformaciones en la estructura social en Costa Rica, estratos socio-ocupacionales, educación y trabajo*. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
13. Consejo Nacional de Rectores (2013). Sistema de Educación Superior en Costa Rica. Taller Regional 2013 de Estadísticas Educativas de UNESCO. Recuperado en: http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/Education%20workshop%20dox/2013_Antigua_Guatemala/14_Costa_Rica_1.pdf
14. Cordero Ulate, Allen (2005). Clases medias y movimientos sociales en Costa Rica. En: *Revista de Ciencias Sociales*. volúmenes III y IV, números 109-110, pp. 157-166.
15. De Souza Silva, José (2011). Hacia el 'Día Después del Desarrollo': Descolonizar la comunicación y la educación para construir comunidades felices con modos de vida sostenibles. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica - ALER. Documento de apoyo a la primera fase —Evaluación y Proyección— del Proyecto ALER 2020: una asociación viva y renovada para un continente que nos desafía. Campina Grande, Paraíba, Brasil.
16. Gumucio Dagron, Alfonso (2001). Haciendo Olas, historias de comunicación participativa para el cambio social. The Rockefeller Foundation. Estados Unidos de América.
17. Gumucio Dagron, Alfonso (2004). El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. En: *Investigación y Desarrollo*. Vol. 12. Nº 1, pp. 2-23.
18. Gumucio Dagron, Alfonso (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. En: *Signo y Pensamiento*. Volumen XXX. Nº 58, enero-junio 2011, pp. 26-39.
19. ICT (2011). Anuario Estadístico 2010. Departamento de Estadísticas, Instituto Costarricense de Turismo (ICT). San José, Costa Rica.
20. Martínez, Zesar; Casado, Beatriz; Ibarra, Pedro (2012). Movimientos sociales y procesos emancipadores. En: *Hegoa*. Nº 57. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Cuadernos de Trabajo. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU.
21. Morales Padilla, Soraya Sirikit Cerdá (2005). Aproximación Teórica al Desarrollo. En: *Aposta*, revista de Ciencias Sociales. Nº 20, julio, agosto y septiembre 2005. Recuperado en <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/soraya.pdf>

22. Olavarria Gambi, Mauricio (2005). Pobreza, crecimiento económico y políticas sociales. Editorial Universitaria S.A. Santiago, Chile.
23. Prieto Castillo, Daniel (1999). La comunicación en la educación, Ediciones CICCUS-La Crujía, Buenos Aires, Argentina.
24. Prieto Castillo, Daniel (2007). Comunicación para el desarrollo: entre los irrenunciables ideales y los juegos de poder. Seminario Comunicación y desarrollo, Encuentros desde la diversidad. INTA, Mendoza, Argentina, noviembre 2007.
25. PROCOMER - Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (2014). Sitio web. Consultado el 20 de setiembre del 2014. Recuperado en: <http://www.procomer.com/contenido/sector-agr%C3%ADcola.html>
26. Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) (2013). Informe nacional sobre desarrollo humano 2013: aprendiendo a vivir juntos, convivencia y desarrollo humano en Costa Rica. PNUD. San José, Costa Rica.
27. Programa de Posgrado en Comunicación - Universidad de Costa Rica (20014). Sitio web. Consultado el 10 de agosto del 2014. Recuperado en: http://www.ppc.ucr.ac.cr/maestria_com_des.html
28. Román Vega, Isabel (2011). Costa Rica: pobreza y desigualdad como determinantes de la salud en los últimos 20 años. En: *La Salud Pública en Costa Rica: estado actual, retos y perspectivas*. Escuela de Salud Pública, Universidad de Costa Rica. Conmemoración del XV aniversario de la Escuela de Salud Pública, 1995-2010.
29. Trejos, María y Villalobos, Roberto (1994). Lo aparente y lo oculto del Ajuste Estructural: del Otro Lado del Ajuste. Escuela de Economía, Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica.
30. Vargas Solís, Luis Paulino (2003). La estrategia de liberalización económica: período 1980-2000. Serie: Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica. Nº 9. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
31. Zeledón, Rosa María (2000). Más de 100 años: radiografía del “desarrollo” bananero. En: Revista Foro. Publicación del Foro Emaús. Nº 2, Costa Rica, enero 2000.